



Efectividad de la Legislación Derivada de la Comunidad Andina de Naciones en la Legislación Ecuatoriana estudio de las decisiones 578, 599, 600, tema actual y muy poco abordado y conocido por la gran mayoría de los ecuatorianos y los habitantes de las cuatro naciones miembros de esta área.

Las disposiciones emanadas por órganos que no poseen competencia legislativa (legal), hace que las disposiciones dictadas por la Can, no gozan el ciento por ciento de fuerza legal-obligatoria, tanto es así que sólo hace un llamado a los Estados miembros, para que en los plazos señalados, armonicen las disposiciones internas a lo establecido en la norma comunitaria derivada; observándose en la práctica la violación a las mismas.

Se ha avanzado tanto en el IVA, RENTA y IMPUESTO AL CONSUMO que en términos generales ha promovido la eliminación de subsidios a las exportaciones subregionales; el establecer un mercado común andino; instituir el principio del país de destino que rige las exportaciones; la armonización de las exenciones que solo abarcaría la educación, salud, transporte terrestre de pasajeros y servicios de intermediación financiera; en lo que tiene que ver propiamente con la armonización tributaria se ha adoptado una tasa general del IVA, la misma que no puede ser menos de 5.7% y la máxima de 19%, y una preferencial que no podrá ser inferior al 30 % de la tasa general, orientado a seguir avanzando en la construcción de un mercado único armonizado, gravar los bienes en cada etapa de la producción, evitando la acumulación de impuestos sobre impuestos facilitando la integración del comercio interregional.

Palabras Claves. Principios tributarios a nivel internacional y de la CAN, poder legislativo, corrientes internacionales del poder legislativo, posición países miembros de la CAN, progreso de la legislación derivada de la CAN, análisis decisión 578, análisis decisión



UNIVERSIDAD DE CUENCA

599, análisis decisión 600 y si efectiva aplicación en nuestro país, reformas constitucionales a ser planteadas, reformas al tratado constitutivo de la CAN a ser introducidas, conclusiones, sugerencias, anexos.



CAPITULO I

NOCIONES GENERALES DE LA CAN

<i>Que es la CAN</i>	2
<i>Que se entiende por Parlamento Andino</i>	8
<i>Su evolución respecto de esta unificación legislativa tributaria.....</i>	11
<i>Efectividad jurídica de su derecho originario y derivado en los países miembros</i>	12

CAPITULO II

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y DERECHO TRIBUTARIO

<i>Principios que rigen el derecho internacional</i>	21
<i>Principios que rigen el derecho tributario</i>	26
<i>Principios que obstaculizan la ideología de una legislación tributaria comunitaria en la CAN</i>	30

CAPITULO III

EL PODER LEGISLATIVO EXTRATERRITORIAL

<i>Corrientes internacionales respecto del poder legislativo tributario internacional</i>	43
<i>Avances respecto de la legislación tributaria comunitaria en la CAN</i>	45
<i>Relación de la legislación tributaria comunitaria con las Constituciones de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones</i>	49
<i>Posición de los países miembros de la CAN</i>	55



CAPITULO IV

ANALISIS DE LA LEGISLACION DERIVADA DE LA CAN Y POSIBLES REFORMAS A INCLUIR

<i>Progresos de la legislación tributaria derivada de la CAN</i>	59
<i>Análisis de la decisión 578, respecto de la unión de la legislación tributaria internacional</i>	62
<i>Análisis de la decisión 599, y su efectiva aplicación en nuestro país</i>	67
<i>Análisis de la decisión 600 y su efectiva aplicación en nuestro país</i>	73
<i>Reformas a hacer introducidas en la constitución Ecuatoriana</i>	75
<i>Reformas en la legislación derivada de la CAN</i>	79
<i>Conclusiones</i>	83
<i>Recomendaciones</i>	88
<i>Bibliografía</i>	92
<i>Anexos</i>	



UNIVERSIDAD DE CUENCA



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, KARINA RAQUEL ARMIJOS RUILOVA, autor de la tesis "EFECTIVIDAD DE LA LEGISLACION DERIVADA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA: ESTUDIO DE LAS DECISIONES 578, 599 y 600", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Magister en Derecho Tributario. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, 3 de enero del 2013

Karina Armijos Ruilova]
0103357463

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

DRA. KARINA RAQUEL ARMIJOS RUILOVA



UNIVERSIDAD DE CUENCA



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, KARINA RAQUEL ARMIJOS RUILOVA, autor de la tesis "EFECTIVIDAD DE LA LEGISLACION DERIVADA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA: ESTUDIO DE LAS DECISIONES 578, 599 y 600", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 3 de enero del 2013

Karina Armijos Ruilova.
0103357463

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

DRA. KARINA RAQUEL ARMIJOS RUILOVA



UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLITICAS Y
SOCIALES

EFFECTIVIDAD DE LA LEGISLACION DERIVADA DE LA COMUNIDAD
ANDINA DE NACIONES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA:
ESTUDIO DE LAS DECISIONES 578, 599 y 600.

Tesis previa a la obtención del Título
de Magister en Derecho Tributario

AUTORA: Dra. KARINA RAQUEL ARMIJOS RUILOVA

DIRECTOR: DR. JOSE VICENTE TROYA JARAMILLO

CUENCA - ECUADOR

2012

DRA. KARINA RAQUEL ARMIJOS RUILOVA



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Las ideas, hechos, doctrinas y criterios son
de exclusiva responsabilidad de la autora.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

DEDICATORIA

La presente tesis va dedicada a mis padres, quienes con su amor y dedicación, me han prestado su apoyo para culminar este reto nuevo reto profesional.



AGRADECIMIENTO

Quiero dejar constancia de mi sincero agradecimiento al Dr. José Vicente Troya y Lcdo. José Castillo Poblete, director de mi tesis y director del postgrado. Así mismo dejo señalado mi reconocimiento a todas las personas que de una u otra manera me han asistido en este trabajo.



**EFFECTIVIDAD DE LA LEGISLACION DERIVADA DE LA COMUNIDAD
ANDINA DE NACIONES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA
ESTUDIO DE LAS DECISIÓN 578, 599, 600.**

INTRODUCCION

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN.

Es necesario afrontar la “EFFECTIVIDAD DE LA LEGISLACION DERIVADA DE LA CAN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, específicamente las DECISIONES 578, 599, 600, observando si nuestro país como miembro activo de esta Organización regional, contribuye a comprender y arribar al gran objetivo de la Unión Regional a nivel legislativo, económico, social, tributario, y político; lo que se traduciría en alcanzar la tan deseada Unión legislativa tributaria de la Comunidad Andina, tema trascendental, actual y muy poco abordado jurídicamente y, desconocido por la gran mayoría de los ecuatorianos y los habitantes de las cuatro naciones miembros de esta área.

Como miembros de un Estado, de una comunidad y de un continente, debemos saber y conocer acerca de esta organización (CAN), sus objetivos, su desarrollo, sus alcances, y contribuir con nuestras opiniones e intervención práctica, al progreso de la misma.

Tema absorbente desde la óptica del derecho interno ecuatoriano, internacional y comunitario de la CAN; permitiendo tener una visión amplia y clara de lo que abarca la unión legislativa tributaria en la Comunidad Andina- (unidad que forjará que sea aplicada esta legislación andina en todos los países miembros, sin reserva alguna), sus fortalezas y debilidades, así como la posición de nuestro país.



Unión legislativa tributaria en la Comunidad Andina, tanto jurídica, política e incluso social; lo que tendría una gran repercusión en el ingreso fiscal de las mismas y el desarrollo económico y social de todos los habitantes de este bloque regional, y especialmente el ecuatoriano que es el tema a ser analizado; dando como resultado la eliminación de competencia desleal- contrabando en las fronteras-, los paraísos fiscales, distorsiones tributarias, incumplimiento de las decisiones de la CAN y por consiguiente sanciones legales y económicas a los estados culpables de las infracciones.

Si bien existe un acuerdo regional la CAN, al que se deben someter cuatro países en su legislación, la permisibilidad de la misma ha permitido la desobediencia de su legislación, no solo por parte de Ecuador, sino de los demás países miembros. Por lo que es necesario reformas urgentes:

A.- Externo (a nivel de la CAN), reforma al tratado constitutivo del acuerdo de Cartagena con miras a alcanzar una real potestad, lo que implicaría conjuntamente con la reforma interna de los países, a arribar a una verdadera Comunidad Andina de Naciones tanto a nivel político, jurídico y económico. Lo que no significa lesionar nuestra soberanía, sino, una nueva forma de ejercerla. Y

B.- Consolidándose con una reforma constitucional a nivel interno de los países miembros que permita delegar ciertas potestades a los órganos supranacionales, y así en el caso del Parlamento Andino, sea realmente el que tenga la potestad legal y absoluta de Crear, Reformar y Derogar la legislación de la Comunidad

Frente a esta situación a ser analizada, se esbozará una reforma a nivel de nuestra legislación, con miras a arribar a una



verdadera unión legislativa y por ende un verdadero poder legislativo tributario en la CAN.

OBJETIVOS

General:

1.- Analizar la legislación derivada de la CAN, decisiones 578, 599 y 600, y delinear una reforma a nivel de nuestra legislación para coadyuvar a un verdadero poder legislativo tributario de la CAN.

Específico:

1.- Analizar la relación que existe entre los principios del Derecho Tributario de la CAN, con los establecidos en la Constitución del Ecuador.

2.- Sugerir los cambios en la legislación interna del Ecuador, para así colaborar a arribar a una armonización con la legislación derivada de la CAN, respeto directo e inmediato a las mismas y, por ende no ser sujeto de sanción por su incumplimiento.

3.- Sugerir cambios en la legislación de la CAN, para alcanzar la unión legislativa tributaria y verdadera efectividad en las legislaciones internas de sus miembros, más concretamente en el Ecuador.

HIPOTESIS.

1.- Existe una falta de efectividad de las decisiones 578, 599 y 600 de la CAN en nuestra legislación ecuatoriana?

2.- Ecuador ha incumplido con las decisiones 578, 599 y 600 de la Can, por contradicciones con la legislación de la CAN?

PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS-



1.- Recolección de bibliografía, de autores tanto nacionales como extranjeros y, también en internet.

2.- Análisis de estas fuentes documentales, de la Constitución de la República, Código Tributario, Código de la Producción, Decisiones 578, 599, 600, 635 de la CAN.

2.- Entrevista a los miembros del Parlamento Andino Ecuatoriano, con Sede en la ciudad de Quito.

SINTESIS

La legislación derivada de la Comunidad Andina de Naciones y su efectividad en nuestra legislación-derecho ecuatoriano, es un tema trascendental, actual y muy poco abordado y conocido por la gran mayoría de los ecuatorianos y los habitantes de las cuatro naciones miembros de esta área, por lo que es necesario afrontar esta temática “Efectividad de la Legislación Derivada de la Comunidad Andina de Naciones en la Legislación Ecuatoriana estudio de las decisiones 578, 599, 600.”, conocerlo y arribar al gran objetivo de la Unión Regional a nivel económico, social, tributario, político.

La Comunidad Andina de Naciones es un grupo integrado por cuatro países Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; que ha permitido que algunos países latinoamericanos hayan expresado su deseo de ser miembros asociados a la CAN, como Panamá, México, Costa Rica y el Caribe; así también países ya asociados como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.

Los objetivos a tratar será el analizar la legislación derivada tributaria andina, la posición de los miembros frente a fuerza legal de las disposiciones emanadas por órganos que no poseen competencia legislativa (legal), la resolución adoptada por la Can y el Tribunal Andino



de Justicia respecto de los principios que ha adoptado, como sostén de su derecho comunitario. En lo que respecta a la fuerza legal de las decisiones emanadas por la Comisión y el Concejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las que para entrar en vigencia necesitan ser incorporadas a la legislación interna de cada país miembro, estando sujeto a la disposición política del gobierno de turno. Lastimosamente mientras no exista un organismo con la competencia legislativa, no se podrá avanzar a ritmo normal. Sólo nos queda como soporte el Tribunal Andino de Justicia que ejerce su prerrogativa de resolver aquellas causas de incumplimiento, y, la más importante, que los países andinos permitan que esta Organización - Comunidad posea autonomía material y formal.

Aun mas; para profundizar en esta fragilidad jurídica, las Constituciones de los tres países (Ecuador, Bolivia, Perú, no han delegado en forma expresa a ningún organismo que conforman la Comunidad de Naciones Andina (CAN), competencia para legislar en torno a esta materia (tributaria).

Si bien la Comisión de la CAN es el órgano normativo, este no goza de legitimidad democrática, ya que está integrado por representantes enviados por cada gobierno, como así también ocurre con los demás organismos, e incluso el Parlamento Andino, por lo que se hace necesario en ciertos casos la incorporación de las decisiones al derecho interno, de acuerdo al trámite establecido para ello.

Por lo que las disposiciones dictadas por la Can, no gozan el ciento por ciento de fuerza legal-obligatoria, tanto es así que sólo hace un llamado a los Estados miembros, para que en los plazos señalados, armonicen las disposiciones internas a lo establecido en la norma comunitaria derivada; observándose ya en la practica la violación a las



mismas, frente a lo cual se hará un llamado para que las observen y apliquen, caso contrario son sujetos de denuncias, demandas y de sanciones comerciales. Acatando las mismas por efecto de esta coerción.

Uno de los objetivos de esta integración regional andina es la armonización, pudiendo enunciar la Armonización del IVA tema trascendental, actual y muy poco abordado y conocido por la gran mayoría de los ecuatorianos y los habitantes de las cuatro naciones miembros de esta área. Por lo que es necesario afrontar esta temática “Armonización del IVA”, comprenderlo y arribar al gran objetivo de la Unión Regional a nivel económico, social, tributario.

La Armonización respecto del impuesto a la Renta, al Impuesto a los consumos especiales; la gran lucha para combatir la evasión fiscal, evitar la doble tributación fiscal que tanto afecta la marcha del mundo a nivel económico-comercial, como es él provocar distorsión en la competencia.

En el presente trabajo se ha utilizado los métodos; recolección de datos bibliográficos en la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar en Quito, el uso del Internet, entrevistas con el Secretario del Parlamento Andino en Quito.

Comencemos estableciendo que la armonización hace relación al conjunto de normas o medidas que inciden en el sistema tributario de dos o más Estados, con la finalidad de evitar distorsiones de origen fiscal en la formación de los precios o libre circulación de bienes, servicios, capitales o personas. “(1)

1./ Montaña Galarza Cesar, Constitución Ecuatoriana e integración Andina, pág. 191. Edit. Konrad, 2005, Montevideo



Esta armonización jurídica tributaria andina no se da de una manera directa, sino, a través:

- 1.- Una Armonización Política
- 2.- Una de Mercado: lo que se traduciría en la convergencia espontánea y voluntaria de los Estados, y
- 3.- Una Fiscal: que implicaría
 - a.- la unión aduanera
 - b.- eliminación completa de fronteras fiscales, y
 - c.- un buen funcionamiento de un mercado común.

Estudiaremos en forma resumida las diferentes teorías que ha adoptado este grupo andino y que norman la vida del mismo, como son:

Los principios de Legalidad, Reserva de Ley, Pacta Sunt Servanda, Equidad, Independencia de los Estados, Generalidad, Igualdad, Proporcionalidad, Progresividad, No Confiscación, Territorialidad, Justicia, Uniformidad, Certidumbre, Irretroactividad de la Ley, Primacía, Preeminencia, Efecto directo y Aplicación Inmediata.

Aplicación inmediata y directa, principio que ha sido un logro en lo que respeta a la integración andina; confirmando este principio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al manifestar que:

Los estados miembros

“Frente a una norma comunitaria no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni escudarse en disposiciones vigentes o practicas usuales en su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteraciones de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los países miembros están comprometidos a no adoptar ni emplear medida alguna que sea



contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso lo preceptúa el Art, 5, segunda parte, del Tratado del 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.”

Las diferentes corrientes respecto del poder tributario extraterritorial, el avance si bien lento en el desarrollo y evolución de la legislación derivada andina, no han minado el objetivo de seguir buscando esa anhelada integración andina, de ahí que podemos destacar las decisiones No. 578, 599 y 600 emitidas en el año 2004, que en términos generales ha promovido la eliminación de subsidios a las exportaciones subregionales; el establecer un mercado común andino; instituir el principio del país de destino que rige las exportaciones; la armonización de las exenciones que solo abarcaría la educación, salud, transporte terrestre de pasajeros y servicios de intermediación financiera; en lo que tiene que ver propiamente con la armonización tributaria se ha adoptado una tasa general del IVA, la misma que no puede ser menos de 5.7% y la máxima de 19%, y una preferencial que no podrá ser inferior al 30 % de la tasa general, orientado a seguir avanzando en la construcción de un mercado único armonizado, gravar los bienes en cada etapa de la producción, evitando la acumulación de impuestos sobre impuestos facilitando la integración del comercio interregional.

Y por ultimo en el tercer capítulo, estudiaremos los progresos de la legislación tributaria derivada de la CAN, analizare la decisión 578, 599 y, 600 su efectiva aplicación en nuestro país.

Propondré reformas hacer introducidas en la Constitución Ecuatoriana de acuerdo a mi criterio; así como en la legislación derivada de la CAN.



Por último frente a esta situación a ser analizada, se plantearía una que a mi juicio sería la más acertada, la reforma a nivel del Tratado constitutivo del Parlamento Andino, que le permita tener competencia privativa para legislar y no solo emitir recomendaciones, como así lo establece su Art. 13. Una reforma constitucional en la que se plasme la real posibilidad de que se pueda delegar ciertas potestades a los diferentes órganos de la Can, y así puedan ejercer un verdadero poder extraterritorial.

En lo que respecta a la creación de un sistema armonizado, unificado del IVA, impuesto a la renta y, a los consumos especiales que es específicamente de lo que se trata este trabajo, primeramente como ya dije se debería partir de una reforma a nivel del Parlamento Andino, el que debe tener competencia legislativa, lo que implicaría la OBLIGACION de acatarlas sin reserva alguna y no se daría la serie de incumplimientos que se han dado y seguirán produciéndose. Ya no se trataría solo de sugerencias a través de estas normas que si bien gozan como ya analizamos de los principios de inmediatez y aplicación directa, no son cumplidas a cabalidad, alegando para ello principios como, los Derechos Humanos y la Supremacía de la Constitución.



CAPITULO I

NOCIONES GENERALES DE LA CAN

- 1.1.- Qué es la CAN?**
- 1.2.- Qué se entiende por Parlamento Andino?**
- 1.3.- Su evolución respecto de esta unificación legislativa tributaria.**
- 1.4.- Efectividad jurídica de su derecho originario y derivado en los países miembros.**



Qué es la CAN?

La CAN es una comunidad integrada actualmente por cuatro naciones, con personalidad jurídica, sujeta a un ordenamiento jurídico propio que llega a ser obligatorio y superior al ordenamiento interno de los Estados miembros (como así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena).

Naciendo a la vida jurídica el 26 de mayo de 1969 a través de la suscripción del Acuerdo de Cartagena, integrándola cinco países del continente americano Bolivia, Colombia, Chile hasta el año 1976, Ecuador y Perú (en 1973 Venezuela ingresa a la comunidad), con un objetivo común el de alcanzar el desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mejorando el nivel de vida de sus habitantes mediante la Integración y la Cooperación económica y social.

Este proceso andino de integración, nace con el nombre de Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena; el mismo que ha tenido que soportar a lo largo de su historia varias crisis como, la decisión de sus miembros de adherirse, retirarse o reincorporarse; así tenemos que se retiran en el año 1976 Chile (por no estar de acuerdo con las políticas económicas) y Venezuela en el 2006 (por las discrepancias políticas entre Colombia y Ecuador, Perú y Chile, Perú y Bolivia, el TLC entre Perú y Colombia con Estados Unidos) que aun no han sido firmados; reintegrándose Chile en el año 2006 en calidad de país asociado.



Su accionar estuvo está encaminado a:

- a.- La apertura de fronteras.
- b.- Flexibilidad en las relaciones laborales.
- c.- Modernización informática y financiera.
- d.- Unificación de las legislaciones nacionales.
- e.- Adopción de políticas comunes.
- f.- Ampliación de mercados.
- g.- Favorecimiento de la movilidad de bienes, servicios, capitales y personas.
- h.- La creación de una zona de libre comercio.

En 1997, el Acuerdo de Cartagena se lo denomina Comunidad Andina de Naciones (CAN), y se ha caracterizado por avances en cuanto a las leyes que tiendan a la unificación de la legislación en torno al IVA, ICE e Impuesto a la Renta, eliminación de aranceles, formación de la zona de libre comercio que en 1993 permitió que el comercio intracomunitario creciera debido a que las mercancías circulan libremente y así se generó empleo, el fortalecimiento jurídico comunitario, políticas comunitarias de integración y desarrollo fronterizo.

En cuanto a su organización, está integrado por los siguientes órganos, los mismos que conforman el sistema andino de integración (SAI):



1.- Consejo Presidencial Andino, creado mediante el Tratado del Acuerdo de Cartagena, órgano máximo del Sistema Andino de Integración; ejerce la representación del Consejo y de la Comunidad Andina; evalúa, impulsa y orienta la integración, **señala el rumbo de de la misma a través de Directrices y Mandatos.**

2.- Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, órgano de dirección y decisión, creado mediante el Tratado del Acuerdo de Cartagena, siendo su participación solo a nivel político. Con el Protocolo Modificador del Acuerdo de Cartagena 1996, se le asigna el nuevo rol de legislador en materia de política exterior, y se lo incorpora al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Entre algunas de sus funciones está: formular la política exterior de los cuatro países miembros en el ámbito regional, a su vez orientar la acción externa de los órganos de la SAI.; cumplir con las directrices dadas por el Consejo Presidencial Andino y velar que sean cumplidas; suscribir Convenios y Acuerdos con terceros países sobre política exterior y cooperación. **Expresa su voluntad a través de Declaraciones y Decisiones de carácter vinculante,** éstas últimas son normas jurídicas comunitarias derivadas.

3.- Comisión de la Comunidad Andina, fue establecida en 1969 mediante el Tratado del Acuerdo de Cartagena, siendo el órgano de dirección, decisión y normativo del Sistema Andino de Integración, integrado por un representante de cada uno de los países miembros, y posee capacidad legislativa conjuntamente con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.



4.- Secretaría General de la Comunidad Andina, órgano ejecutivo y apoyo técnico, está dirigida por un Secretario General elegido por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; **puede proponer propuestas de Decisiones, iniciativas y sugerencias** al Consejo de Ministros así, como también a la Comisión; velar por el cumplimiento de los compromisos comunitarios; mantener vínculos permanentes con los países miembros.

5.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina de Naciones, integrado por cuatro magistrados de cada uno de los países, con competencia territorial en ellos, siendo su sede permanente en Quito-Ecuador.

6.- Parlamento Andino, órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, representante de todos los habitantes de las cuatro naciones que conforman la Comunidad Andina, siendo sus representantes elegidos por elecciones directas (en la actualidad sólo en Colombia, Ecuador y Perú).

Sus funciones consisten en: **participar en la generación normativa del proceso mediante sugerencias de proyectos de normas de interés común**; promover la armonización de las legislaciones de sus miembros y las relaciones de cooperación y coordinación con los parlamentos de los países miembros y de terceros estados.

7.- Consejo Consultivo Empresarial, institución consultiva de la sociedad civil.

8.- Consejo Consultivo Laboral, institución consultiva de la sociedad civil.

9.- Corporación Andina de Fomento CAF, institución financiera que opera desde 1970, apoya al desarrollo sostenible de sus miembros en el ámbito público y privado. Siendo la principal fuente de financiamiento multilateral de los países de la Comunidad Andina de Naciones.



- 10.- Fondo Latinoamericano de Reservas, institución financiera.
- 11.- Convenio Simón Rodríguez, convenio social.
- 12.- Convenios Sociales
- 13.- La Universidad Andina Simón Bolívar, institución educativa.
- 14.- Consejos Consultivos que establezca la Comisión.
- 15.- Demás órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración andina.

Organismos creados con la participación de las voluntades de los cinco países, ahora cuatro.

Destacando la presencia del Tribunal de Justicia Andino, que es un Tribunal Superior investido de competencia para conocer y resolver las cuestiones de derecho que se presenten, teniendo entre sus competencias:

- a.- Controlar el cumplimiento de las normas tributarias.
- b.- La acción de nulidad
- c.- La acción de incumplimiento.
- d.- La interpretación uniforme de las normas comunitarias.
- e.- Interpretación Prejudicial.



- f.- Conocer y resolver el recurso de Omisión.
- g.- Ejercer las funciones de árbitro y
- h.- Ejercer el poder jurisdiccional en materia laboral.

Acentuando de manera especial, la potestad de conocer, absolver, resolver y sancionar las quejas presentadas por sus similares, cuando se produce incumplimiento de las mismas; siendo el guardián de la seguridad jurídica de esta organización regional y contribuyendo a que siga adelante el proceso de integración.

En el año 1997 cuando se crea la Comunidad Andina de Naciones, en reemplazo del Acuerdo de Cartagena, se introducen reformas encaminadas a que la conducción del proceso de integración, pase a manos de los Presidentes, así como el Consejo Presidencial y Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, los mismos que forman parte de la estructura de la Institución.

En el año 2003 se establece un plan integral de Desarrollo Social, el mismo que empieza a desarrollarse en el 2007, produciéndose cambios en las áreas sociales, ambientales, relaciones externas, entre otros. Pudiendo subrayar los grandes logros de esta integración andina durante estos largos 40 años, como:

- La libre circulación de personas dentro de los países miembros de la Can.



- Normas que garantizan la circulación y permanencia de los nacionales andinos con fines laborales con derecho a la seguridad social.
- Plan integral de desarrollo Social, trabajando en áreas como el empleo, salud, educación, biodiversidad, medio ambiente, etc.
- Se estableció una agenda ambiental.
- La aprobación del Arancel Externo Común en cuatro niveles de 5-10-15 y 20-%, aplicables para los productos no originarios de los países miembros de la CAN, los mismos que rigen a partir del 31 de octubre de 1992.
- La eliminación de subsidios cambiarios, financieros y fiscales a sus exportaciones intrasubregionales.
- Se define un arancel de 0% para los productos no producidos o de producción insuficiente.
- Preferencia a la producción subregional, políticas de apertura y la inserción competitiva a la economía mundial; profundizando la integración Andina.

Pero también se ha estancado o ha habido retrocesos como por ejemplo, el acuerdo con la UE, la firma de tratados de libre comercio, las negociaciones para avanzar en el proceso de integración; estancamiento debido a la actitud de falta de decisión política por parte de Bolivia, y de Ecuador como el de imponer las salvaguardias a nuestra economía en contra de la normativa vigente de la CAN y por ende del proceso de integración andina, las reformas al código tributario, a la Ley de Régimen Tributario Interno, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Qué se entiende por Parlamento Andino?



El Parlamento Andino es creado el 25 de octubre de 1979, el que representa a los pueblos de la comunidad andino, ya que viene a ser lo que es el Congreso Nacional de los Estados Miembros. Siendo sus representantes elegidos, mediante voto universal directo y secreto por los ciudadanos, (resolución que ha sido acatada en la actualidad por Colombia, Ecuador y Perú. Previendo que Bolivia lo realice en el año 2015.

Entre sus funciones está:

- La de participar en la generación de normas para alcanzar los objetivos de esta integración, mediante sugerencias que serán analizadas por los diferentes órganos de este sistema de integración.
- Promover la armonización de las legislaciones andinas, así como las normas regionales, y
- Promover la cooperación, y coordinar con los parlamentos de los países miembros y terceros países respecto de esta armonización.

Funciones que constan detalladas en la página WEB: Parlamento Andino .mht .

Dejando establecida la función de tipo consultivo solamente, lo que se traduce en un poder limitado dentro de la Comunidad Andina.

El Parlamento Andino de acuerdo al Protocolo modificadorio de su creación, y del Protocolo Adicional sobre elecciones directas y universales de sus representantes de abril de 1997, debería darse la integración del mismo a través del Régimen Electoral Uniforme, pero desgraciadamente uno de los puntos en los cuales ha habido un estancamiento, es este



precisamente; aun está siendo integrado por los representantes elegidos por los países miembros en forma independiente por sufragio universal y secreto (Colombia- Ecuador-Perú) y, otros designados por el Congreso de cada país (Bolivia). Estando conformado por la mesa directiva que es presidida por su presidente, quien en la actualidad es el señor Adalid Contreras Baspineiro (representante Boliviano), y sus vicepresidentes, quienes durarán dos años en sus funciones; estando su sede ubicada en Bogotá- Colombia. No cumple en la actualidad su función que sería, el ser el órgano de quien emane la normativa jurídica de la CAN, únicamente se limita a formular recomendaciones, sugerir acciones y decisiones cuyo objeto sea modificar, ajustar los lineamientos, objetivos y la estructura institucional del sistema andino, participar en la generación normativa a través de sugerencia a los órganos, promover y coordinar relaciones de Cooperación; como vemos su labor, competencia, función y fin no es propiamente el que debería ser. Situación diferente en la Comunidad Europea, ya que siempre se buscó una verdadera representación popular; es así que el 30 de marzo de mil novecientos sesenta y dos pasa a denominarse Parlamento Europeo, siendo sus miembros todos, elegidos por primera vez el 07 y 10 de junio de 1979, proporcionándole una legitimidad democrática, pero muy limitadas sus funciones en un principio, como el de control a la Comisión y un proceso legislativo limitado solo a consulta; para más adelante ampliar su competencia, sus prerrogativas y su ámbito de acción como competencias presupuestarias, interponer recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo por violaciones al Tratado, formular dictámenes sobre propuestas de la Comisión, aprobar junto al Consejo reglamentos, directivas u otros actos jurídicos; el ser consultado sobre la posición acción común que adopte el Consejo; participación del Parlamento en la consulta, dictamen conforme y codecisión en la toma de las decisiones; aprobar la designación del candidato a la presidencia de la Comisión.



Su evolución respecto de esta unificación legislativa tributaria

Debemos proceder a analizar la normativa vigente en la comunidad andina y ver si la misma ha sido y es aplicada por los Estados miembros.

Partiendo del hecho de que como órgano legislativo no crea derecho, solamente se limita como ya lo enuncié en el tema anterior a formular recomendaciones, sugerir acciones, participar en la generación normativa a través de sugerencia a los órganos, promover y coordinar relaciones de Cooperación.

Siendo su evolución en el tema de la unificación legislativa tributaria andina, muy limitado; ya que su labor se ha enmarcado a:

- Promover y orientar el proceso de integración.
- Apoyar el pleno imperio de la libertad, justicia social y la democracia.
- Fomentar el desarrollo de la integración latinoamericana.
- Promover y difundir las normas del nuevo orden internacional.

Nada de lo relacionado con la legislación de la CAN, ya que los órganos de quien emanan las leyes- decisiones que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y son publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo son, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y la Comisión de la Comunidad Andina (propiamente el órgano normativo - legislativo) que igualmente no posee



representación democrática ya que sus representantes son nombrados directamente por los gobiernos; siendo el encargado de velar-salvaguardar por el cumplimiento y sancionar la inobservancia de la normativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Efectividad jurídica de su derecho originario y derivado en los países miembros.

El marco jurídico andino es un verdadero derecho comunitario, que se encuentra constituido- compuesto por un derecho originario y uno derivado.

Derecho Originario o derecho Comunitario internacional, son instrumentos que crean, o modifican una organización internacional (CAN), enmarcándose dentro de Él, los tratados internacionales sean estos de constitución, modificación o de adhesión. Y su vigencia depende de su incorporación al derecho interno de cada Estado de acuerdo a su procedimiento interno.

Mientras que el **Derecho Derivado**, son actos jurídicos emanados de las Instituciones Comunitarias, como la Comisión y el Concejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Son expresiones normativas y su vigencia depende de lo establecido en el tratado internacional; comprendiendo dentro de ello a las decisiones y resoluciones.



Primeramente analizaremos la posición de la CAN, respecto de este tema.

De acuerdo al Tratado Constitutivo del Acuerdo de Cartagena modificado en 1996, que para muchos tratadistas y para mí también, sería la Constitución de este organismo supranacional, establece en el artículo 4:

“Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.”

Adoptando los principios de efecto directo y aplicación inmediata de las mismas y dejando sentado el alcance y los efectos de las normas del derecho comunitario originario y derivado en sus artículos 2 y 3:

Art. 2 “dispone la obligatoriedad de las decisiones de la Comisión, desde la fecha en que son aprobadas por el organismo comunitario. “

Art. 3. “Las decisiones de la Comisión son directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial del Acuerdo. “

Al ser miembros de esta organización, creada por voluntad propia, y poniendo como garante de esta relación internacional al Convenio de Viena, que establece en lineamiento generales el PRINCIPIO PACTA SUNT



SERVANDA, por la cual los Estados deben cumplir los tratados, tanto su derecho originario como derivado. Partiendo de esta premisa, los gobiernos aceptan el régimen jurídico comunitario con los principios que analizaremos y señalaremos más adelante; régimen especial y diferente a las legislaciones internas, las mismas que serán aplicadas con preferencia cuando exista contradicción; las disposiciones del derecho comunitario derivado orientan la armonización tributaria.

Sin dejar de lado el principio REBUS SIC STANTIBU o TEORIA DE LA IMPREVISION, el cual es concebido para evitar los abusos y las injusticias que se producirían si de un modo, repentino imprevisto, un acontecimiento cambia las circunstancias que existían el momento en que se firmó el contrato-convenio-tratado.

Posteriormente a raíz de la creación de la Comunidad Andina y la reestructuración de los órganos comunitarios por el Protocolo de Trujillo del año 1996, se modifican estos dos artículos en el sentido de que no solo las decisiones de la Comisión son de obligatoria aplicación, también lo son, las del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Entendiéndose que son incorporadas a las legislaciones internas y están vigentes; pero sí, observándose en la práctica que no se las cumplen en forma absoluta.



Enunciaré algunos casos de incumplimiento denunciados ante el Tribunal de Justicia Andino.

- 1.- proceso 454 incumplimientos de Colombia, respecto del tratamiento de alcohol y licores.
- 2.- p. 305 Ecuador por no aplicar el derecho anti dumping.
- 3.- 016/97.- Perú por no aplicar la decisión 344 y el régimen común sobre propiedad industrial.
- 4.- 831.- Bolivia por no aplicar el artículo 4 del Tribunal de Justicia y 34 de la resolución 432.
- 5.- 01-01-2006.- a Ecuador por la no importación o restricción del ingreso de las papas de Colombia y Perú.
- 6.- 143-a1-2006 por que Ecuador modificó en forma unilateral a 0% el arancel para productos fluorescentes.

Frente a esta realidad, el Tribunal Andino de Justicia manifiesta que frente a una norma comunitaria, no se pueden formular reservas, ni desistir de aplicarlas en forma unilateral, ni escudarse en la legislación interna o alterar las obligaciones. Tampoco se debe olvidar que existe el compromiso de no adoptar medidas contrarias a dichas normas o que obstaculicen su aplicación, como así lo establece el artículo 5 del tratado del 26 de mayo de 1979, por lo que determina automáticamente la inaplicabilidad del derecho interno contrario al comunitario, y, esto en vista de la supremacía. Igualmente nos dice que en caso de conflicto, la norma supranacional



desplaza a la interna, **no la deroga**. Y, aun más, si en la realidad vemos este incumplimiento normativo cualquiera de nosotros, miembros de los cuatro países integrantes de esta Comunidad Regional puede demandar ante el Tribunal de Justicia de la CAN o en los tribunales de Justicia de las naciones de la Comunidad Andina la aplicación del ordenamiento jurídico de la CAN.

Habiendo ya jurisprudencia al respecto, mediante las sentencias dictadas en los procesos 5-ip-89 del año 1987 y 2-ip-88 del año 2000 (anexos).

Sin embargo, la regla de aplicación directa se la aprovecha de manera parcial, en lo que se relaciona a los tributos; ya que las decisiones emitidas por la Comisión y el Concejo de Ministros de Relaciones Exteriores gozan de este principio, cuando orientan la norma interna para alcanzar la armonización, como es el caso de las decisiones relacionadas con la Unión Aduanera, la Zona de libre Comercio; no así cuando debe regular la creación, derogación y modificación de los tributos, tanto en sus elementos objetivos como subjetivos.

Prueba de ello es que las decisiones de manera general, al finalizar la reglamentación y a veces en determinados artículos, se establece que los países **adoptarán** los mecanismos necesarios e informarán a la Secretaría General los avances en esa materia, además que deja abierto cierto lapso de tiempo para que se siga aplicando el régimen interno e incluso, como veremos en la decisión 600, establece que por solicitud de los países puede ampliarse el plazo de vigencia de la misma hasta por tres años.



Es más, existe a nivel ya de los organismos de la CAN, el Tribunal de Justicia, el que tiene entre sus atribuciones el conocer los asuntos referentes a la nulidad que esboce cualquier país o ciudadano respecto de una norma violatoria al ordenamiento comunitario; el conocimiento de incumplimiento del orden jurídico de la CAN por parte de sus miembros, proceso que culmina con sentencia que conmina –amenaza-exhorta-exige al país infractor que adopte los actos necesarios para superar el impase o, caso contrario, se someterá a la suspensión total o parcial de las ventajas que tiene por ser miembro de la Comunidad.

Como vemos esta organización supranacional, tiende a buscar la manera de otorgar seguridad jurídica al proceso de integración en su conjunto, pero deberá tener presente al momento de dictar normas derivadas, los principios de legalidad, reserva de ley, la reserva legislativa, el poder democrático, la no confiscatoriedad, el derecho a la propiedad, la seguridad jurídica; principios que deben ser observados en forma más severa cuando se trata de las disciplinas jurídicas tributarias y penales, para que no se produzcan los incumplimientos que hemos enunciado, amparándose en la violación de los principios ya enunciados.

Por parte de los Estados miembros de la CAN, existen algunas reservas que ha llevado a esta serie de incumplimientos del derecho comunitario, empezando por el hecho de que en sus Constituciones se establece que sólo el Poder Legislativo es el único competente para dictar, cambiar y derogar leyes referentes a esta materia tributaria; teniendo cierto ámbito de poder tributario los organismos seccionales, por disposición constitucional. (Reserva legislativa)



También aluden de que existen varias convenciones a nivel internacional, en la que se establece que el poder legislativo interno y comunitario debe ser elegido por nosotros, practicándose la democracia ya no sólo electiva sino participativa, lo que implica nuestra intervención directa para regular aspectos inherentes al derecho penal y tributario.

Como son las declaraciones:

1.- Derechos del hombre y del ciudadano del 24 de junio de 1793 de Francia.

2.- Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 agosto de 1789.

3.- Declaración de derechos Ingleses del 13 de febrero de 1689; declaración que tiene preeminencia sobre la norma interna y supranacional.

Necesariamente debemos realizar un estudio del ámbito de competencia de los órganos e instituciones de la Comunidad Andina, respecto de la materia tributaria.

Señalaré que las Constituciones de los cuatro países (Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia), no han delegado en forma expresa a ningún organismo que conforman la Comunidad de Naciones Andina (CAN), competencia para legislar en torno a esta materia (tributaria).

Si bien la Comisión de la CAN es el órgano normativo, este no



goza de representación popular, ya que está integrado por representantes enviados por cada gobierno, como así también ocurre con los demás organismos, e incluso el Parlamento Andino, por lo que, a mi manera de ver, es el “pretexto” perfecto de todos sus miembros para en algunas ocasiones violar las mismas. Lo que sumado a las diferentes tendencias e intereses políticos de cada Estado, ha hecho que la CAN se estanque y su desarrollo y vigencia se vea gravemente amenazado.

Por lo que concluiría expresando que desde mi punto de vista, las decisiones dictadas por la CAN, a pesar de su vigencia no son acatadas en un ciento por ciento, ya que en las mismas se hace sólo un llamado a los estados miembros para que en los plazos señalados se armonicen las disposiciones internas a lo establecido en la norma comunitaria derivada; *ejemplo de lo que expreso es lo señalado en los Art. 40 y 12 de las decisiones 599 y 600 en lo relativo a su vigencia, se señala que serán incorporadas al derecho interno de cada país cuándo así lo prevea su norma constitucional.....*

Otro ejemplo de esta situación es la acción de incumplimiento que se ha regulado en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien conoce y resuelve las controversias por incumplimiento de la norma legal andina por parte de los países miembros.



CAPITULO II

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y DERECHO TRIBUTARIO

- 2.1.- Principios que rigen el derecho internacional.***
- 2.2.- Principios que rigen el derecho tributario.***
- 2.3.- Principios que obstaculizan la ideología de una legislación tributaria comunitaria en la CAN.***



Principios que rigen el derecho internacional

1.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Este principio tiene su fundamento en la premisa de que no hay tributo sin ley; es decir en materia tributaria entiéndase que nosotros los contribuyentes cancelamos tributos que estén establecidos mediante Ley formal.

2.- PRINCIPIO DE GENERALIDAD E IGUALDAD.- Las leyes tributarias son generales y abstractas que rigen para todas las personas que viven en el territorio de un Estado o de una región (Comunidad Andina), sin consideraciones especiales, exenciones, ni discriminaciones por razones sociales, económicas o políticas.

Este principio tributario va de la mano con el principio de igualdad, que consiste en primer lugar que todos somos iguales ante la Ley, y en segundo lugar que frente a situaciones iguales se regulará en la misma forma y en situaciones desiguales de una manera diferente por razones de interés público.

3.- PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y PROGRESIVIDAD.- La proporcionalidad, se refiere a que el porcentaje del pago del impuesto será constante, independientemente de los ingresos de la persona, por ejemplo el IVA que en nuestro país es del doce por ciento.

La progresividad, consiste en que los impuestos aumentan en la medida que crece el nivel de ingreso del contribuyente, así tenemos los porcentajes progresivos del impuesto a la Renta.



4.- PRINCIPIO DE LA NO CONFISCACIÓN.- Principio que se adopto como conquista para frenar el anarquismo de los regímenes de las monarquías; que se traduce en que el Estado no puede violar el patrimonio de los particulares.

5.- PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD.- Es decir la carga tributaria establecida mediante ley, rige exclusivamente dentro de las fronteras territoriales del Estado único o de la Organización Regional (CAN), sobre los habitantes sin consideración de su nacionalidad o domicilio.

En lo que se relaciona con la Comunidad de Naciones, haadoptado el criterio de origen en su relación con terceros países, y el de la fuente en las relaciones intra regionales.

6.- PRINCIPIO DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.- Es un presupuesto reconocido a nivel mundial y en los países que conforman la CAN, de que la Ley rige para el futuro y no tiene efecto retroactivo; caso contrario se estaría produciendo una transgresión a los derechos adquiridos, a la certeza y seguridad jurídica.

En materia tributaria este principio es aplicable desde un punto general, en donde esta primicia es aplicada en su exacto contenido o definición de irretroactividad del ordenamiento jurídico; y ya en el ámbito penal tributario (delitos, contravenciones, faltas reglamentarias) tenemos que sufre una excepción, la misma que es aplicada cuando la norma legal es más favorable, como el suprimir infracciones, el establecimiento de sanciones benignas o términos de prescripción mas breves.



7.- PRINCIPIO DE JUSTICIA.- Parte de que el Estado necesita como contraparte de sus habitantes, contribuciones económicas para solventar las necesidades de un presupuesto fiscal, cargas que irá en proporción a su capacidad económica, a sus ingresos, lo que conlleva que los impuestos deben ser justos, equitativos y que se desarrollen a través de los principios de Generalidad y Uniformidad.

8.- PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD.- Al ser todos iguales ante la Ley y frente a los impuestos, todos cancelamos el valor regulado.

9.- PRINCIPIO DE CERTIDUMBRE.- Hace relación a que las regulaciones tributarias deben gozar de firmeza y no arbitrariedad; determinando la ley con precisión los elementos del hecho generador, es decir, los sujetos, el objeto, cuota, fecha de pago, a quien se paga, las penas o sanciones, los recursos, etc..

10.- PRINCIPIO DE ECONOMIA o POLÍTICA FINANCIERA.- Principio que más se refiere al deber que tiene el Estado primero, de determinar el tributo de acuerdo a las necesidades financieras, planificando sus ingresos para los gastos que se tendrán que realizar, buscando el equilibrio de las finanzas publicas.

11.- PRINCIPIO DE EQUIDAD.- La carga impositiva debe gravar en forma proporcional a todos, el no establecimiento de exenciones, y establecer cuotas leves para que así puedan cancelar las personas ricas y pobres.



12.- PRINCIPIO DE NACIONALIDAD.- Las leyes tributarias se aplicaran a todos los ciudadanos que ostentaren la nacionalidad de un país, sin importar el lugar de su residencia, ni dónde se obtienen los ingresos. Permitiendo gravar a sus nacionales en el lugar que se encuentren, ejemplo de ello es la regulación de los Estado Unidos y Filipinas.

13.- PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA.- Concebido en el Tratado Internacional de Viena que establece que los convenios, tratados deben ser observados fielmente, obligando a las partes a cumplirlos de buena fe.

14.- PRINCIPIO DEL RESPETO A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS.- Universalmente están protegidos tanto los derechos humanos como patrimoniales, a través de las conquistas que se han plasmado en la firma de convenios, de cartas de derechos humanos y también en las Constituciones de los Estados.

15.- PRINCIPIO INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS.- El mismo no está subordinado políticamente, goza de competencia frente a otros Estados para gobernarse, dirigirse conforme crea conveniente.

16.- PRINCIPIO DE PRIMACIA DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA LEY INTERNA.- El derecho comunitario al ser ratificado por los países miembros, pasan a formar parte del ordenamiento interno de los Estados; existiendo dos teorías al respecto:



a.- Monista moderado.- Que concibe a los dos derechos como uno, ocupando el primer lugar el ordenamiento internacional - derecho comunitario.

b.- Monista absoluto.- Plantea que deberá derogarse la norma nacional y predominar la internacional.

Prevaleciendo en la práctica la primera teoría.

17.- PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.- La Reserva de Ley es un principio Constitucional, por lo que va de la mano con la Supremacía Constitucional y la Legalidad, siendo su característica constitucional, el que goce de firmeza.

La reserva hace referencia al hecho de que las normas, en especial las tributarias, deben ser creadas, reformadas y derogadas por el órgano con poder tributario, que es el Congreso del Estado, y por delegación en ciertas materias el Ejecutivo y los gobiernos Seccionales y Provinciales en el caso de nuestro país.

Principio que consagra un mandato del contribuyente y obliga a todos los poderes constituidos; concibiéndolo actualmente como un límite al poder del legislativo y ejecutivo y controlando la constitucionalidad de las leyes y normas en general.

La reserva de ley en materia tributaria establece que exclusivamente la ley puede crear tributos y en ella debe establecerse los elementos constitutivos del tributo como son, el objeto, los sujetos que intervienen en la relación tributaria, la base imponible, las tasas



exenciones, infracciones y penas; ya que implica afectar la esfera del patrimonio de las personas y su libertad de disponer de sus ingresos. Procedimiento que debe ser el establecido en la Constitución, siendo el poder legislativo el que posee este poder; en el caso de los organismos supranacionales como la CAN sería el Parlamento Andino.

Principios que rigen el derecho tributario

La Comunidad Andina en el ámbito de la armonización en general y específicamente en lo relacionado con los impuestos indirectos, ha adoptado los siguientes principios-teorías:

1.- PRIMACIA DEL DERECHO COMUNITARIO: El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena consagra el principio de la Supremacía Absoluta e incondicional del ordenamiento comunitario sobre el nacional, confirmándolo el Art. 189 del Acuerdo de Cartagena; lo que implica que ninguno de los Estados miembros puedan en forma unilateral anular sus efectos, ya que ello implicaría poner en peligro el alcanzar los objetivos trazados en el tratado.

2.- PREEMINENCIA: El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la resolución No. 3-AI-1998 del 11 de febrero de 1999, deja sentado este principio de preeminencia del Derecho Comunitario Andino sobre el Nacional y por ende el de aplicabilidad inmediata - directa en el territorio de los Estados miembros.



Es decir, cuando surge contradicciones entre estos dos Derechos, por este principio, la norma comunitaria desplaza a la nacional pero, no la deroga; deberá adecuarse la ley interna mediante una reforma legislativa.

En la práctica no debería darse esta contraposición entre las dos normas, en vista de que como veremos el trámite jurídico legal para el beneplácito de los convenios internacionales, impediría que podamos excusarnos de cumplirlos.

3.- EFECTO DIRECTO.- Con la modificación del Tratado del Acuerdo de Cartagena se deja en claro el alcance y los efectos de las normas del derecho comunitario originario y derivado; es así que en los Art. 2 y 3, se refiere a estos aspectos:

Art. 2 “dispone la obligatoriedad de las decisiones de la Comisión, desde la fecha en que son aprobadas por el organismo comunitario. “

Art. 3. “Las decisiones de la Comisión son directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial del Acuerdo.

Posteriormente a raíz de la creación de la Comunidad Andina y la reestructuración de los órganos comunitarios por el Protocolo de Trujillo del año 1996, se modifican estos dos artículos en el sentido de que no únicamente las decisiones de la comisión son de obligatoria



aplicación, también lo son las del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

4.- APLICACIÓN INMEDIATA: Como vimos en los párrafos anteriores las decisiones de derecho derivado son de inmediata aplicación, ya que es vinculante al derecho interno de los Estados miembros de la comunidad.

De acuerdo a tratados firmados por los países del mundo entero y en especial los que forman esta comunidad supranacional andina, como es la Convención de Viena que establece el Principio PACTA SUNT SERVANDA “Los pactos han de cumplirse” (2); los países deben hacer extensiva la misma al derecho comunitario original y derivado.

Permitiendo que este derecho supranacional en su aplicación, goce de seguridad jurídica, caso contrario los países miembros pretexto de la no concordancia con la Ley nacional, podrían no aplicarlo y lesionarían el camino hacia una integración gradual.

Esta regla de aplicación inmediata y directa ha sido un logro en lo que respeta a la integración andina; confirmando este principio el Tribunal Andino de Justicia, al manifestar que:

.....

2.- Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, edit. Heliasta S.R.L., pág. 288



Los estados miembros

“Frente a una norma comunitaria no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni escudarse en disposiciones vigentes o practicas usuales en su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteraciones de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los países miembros están comprometidos a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso lo preceptúa el Art. 5, segunda parte, del Tratado del 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.” (3)

En lo que refiere a las normas tributarias, como veremos más adelante en el análisis que se realizará de la normativa vigente con relación a la armonización del IVA, ICE y el Impuesto a la Renta, se requiere que las normas sean dictadas por el Parlamento Andino representado por los parlamentarios andinos, elegidos por votación de los ciudadanos; pero en la actualidad lastimosamente no se puede hacer realidad este objetivo ya que no todos los países a nivel interno lo han hecho, por lo que el mismo no posee la competencia para ello. Así también se entiende establecido por el principio de NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE, es decir la norma debe tener fuerza de ley.

.....
3.- Plazas Vega Mario, Armonización Tributaria y Supremacía del Derecho Comunitario, pág. 229



La aplicación de las normas tributarias derivadas respecto de los tributos es de aplicación directa de manera parcial, ya que las decisiones de la Comisión o del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, desplazan u orientan a la norma tributaria nacional, por lo que no requieren ni el pronunciamiento previo ni la aprobación por parte de los parlamentos nacionales; pero para que un juez lo aplique deberá ser consultado obligatoriamente al Tribunal Andino de Justicia, caso contrario acarrearía la nulidad de ese proceso.

El artículo 4to del Tratado del Acuerdo de Cartagena, modificado por el Protocolo de Cochabamba del 28 de mayo de 1996, dispone:

“Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.”

Estos principios consagrados en la Comunidad Andina de Naciones son salvaguardados por el Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena y establece de esta manera la seguridad jurídica que requiere este organismo supranacional para seguir desarrollándose.

Principios que obstaculizan la ideología de una legislación tributaria comunitaria en la CAN.

Existe en algunos países miembros de la CAN, un acentuado choque de sus legislaciones y de su concepción política, respecto de la aplicación de la legislación tributaria de la CAN, en sus respectivas legislaciones, esencialmente por:



a.- PRINCIPIO DE LA SOBERANIA.-

Se entiende por soberanía:

“La facultad total y exclusiva de un Estado a mandar a través de la propia voluntad manifiesta frente a los demás Estados; es la competencia única que le asiste para realizar actos legislativos, ejecutivo y judicial dentro de su ámbito del poder territorial”. (4)

Relacionado el mismo con el principio democrático, que se lo entiende en el sentido de que las normas del derecho comunitario no pueden ir más allá, de lo establecido en la Constitución de cada Estado; se debe dar esta participación del pueblo que es el que ostenta la soberanía.

“Manifestación que distingue y caracteriza al poder del Estado, por el cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación ni subordinación que cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones.” (5)

Las Constituciones andinas establecen que la Soberanía radica en el pueblo, es su voluntad la base de la autoridad que se ejerce a través de los órganos del poder público...participación participativa. Por lo que la soberanía no está subordinada a ninguna autoridad que en el caso de los cuatro países miembros de la CAN, se lo ejerce en un sistema Presidencialista a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

.....

4.- BuhlerOttmar, Principios de Derecho Internacional Tributario, Edit., Derecho Financiero, Madrid, 1968, pág. 173

.....

5.- Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, edit. Heliasta S.R.L., pág. 367.



El Dr. Zavala Molestina expresa en su obra La Institucionalización Jurídica de los Procesos de Integración y Supremacía de la Normativa Comunitaria, que actualmente se habla de la soberanía como una mera competencia estatal, ordenada por el derecho internacional, que mira más allá de los derechos, deberes, responsabilidades y el dominio de los Estados; lo que no implica menoscabo ni sometimiento de la soberanía estatal.

Hablamos en la actualidad de una soberanía relativa, ya que se encuentra circunscrita a la interacción de los demás estados miembros de la CAN, haciendo posible el proceso de integración.

Si bien se ha establecido a través de las decisiones que los países de la Can, están obligados a cumplirlas una vez que sean aprobadas, siendo directamente aplicadas a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que ella señale una fecha posterior. Criterio que ha sido ratificado con la aprobación del Protocolo de Cochabamba mediante la resolución No. 26674, del 23 de octubre de 1996.

Por lo que se entendería que se está violando la soberanía del Estado, ya que como mandan las Cartas Supremas de los Estados, es el poder legislativo el que detenta el poder tributario o, en el “peor de los casos”, sería el Parlamento Andino, el que por delegación y conformado por diputados elegidos por votación popular, el que exteriorizaría la prerrogativa de dictar leyes tributarias.

De ahí que observamos y ya enunciamos incumplimientos que se han dado y seguirán surgiendo respecto de las decisiones.



b.- PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL: Al reconocer el Tribunal de Justicia Andino el principio de la Supremacía del Derecho Comunitario, debemos obligatoriamente preguntarnos si lo está por encima de la Constitución de los países miembros.

Encontrando en la doctrina internacionalista dos criterios:

1.- La Teoría Monista - Moderada: que establece que el Estado debería reformar, derogar en forma urgente la norma contraria al ordenamiento internacional. Es decir sería solo el Estado a través de su órgano competente el que lo realice, con miras a alcanzar la unificación de las leyes.

2.- La Teoría Monista - Absoluta: manifiesta que se daría la derogatoria del derecho de gentes- internacional; lo que conllevaría apartarnos del compromiso adquirido a través de la firma de varios convenios internacionales, en los que se establece el principio de la Pacta Sunt Servanda.

Para algunos juristas como el Dr. Julio Cesar Trujillo, se da la preeminencia del derecho comunitario internacional sobre el interno e incluso el constitucional, es decir están subordinados pero no lo deroga ya que este trámite jurídico le corresponde al ámbito interno a través del poder legislativo que exterioriza la representación popular.

Aplicándose en al ámbito de la Comunidad Andina el primer criterio; de ahí que si uno de los Estados incumple el adecuar el contenido de la norma nacional al derecho comunitario, los demás países tienen la libertad de denunciarlo ante el Tribunal de Justicia, para



que sea éste, quien conmine a la reforma o derogatoria de la misma o, se haría acreedor a las sanciones establecidas para estos casos.

A mi criterio no se estaría lesionando este principio, ya que los Estados andinos, de manera voluntaria han celebrado y ratificado el convenio de integración a nivel regional y como veremos más adelante se ha legislado el trámite para el mismo, e incluso un control constitucional, ya sea previo, posterior, obligatorio o facultativo.

Por lo que mal podrían los Estados enunciar y mucho menos dejar de cumplir los mismos, caso contraria estaríamos frente a una inestabilidad jurídica en relación a los tratados bilaterales, multilaterales, regionales y continentales.

C.- LA SUPRANACIONALIDAD:

No hablamos de una lesión a la soberanía de los Estados miembros, sino de una limitación voluntaria del poder público de los mismos, quienes delegan ciertas potestades, prerrogativas a estos organismos internacionales. En el caso de la CAN a sus órganos que la conforman, lo que no implica desconocimiento del poder tributario.

Existiendo los órganos que constituyen el Sistema Andino de Integración ya enunciados en el capítulo anterior, creados con la participación de las voluntades de los cuatro países; destacando la presencia del Tribunal de Justicia Andino, que tiene entre su principal competencia a ser destacada, el controlar la legalidad de las normas tributarias y la acción de incumplimiento.



Cuando se unen los países para formar una integración, lo que hacen es crear un nuevo ordenamiento jurídico supranacional; comunidad que velará por los derechos y deberes en bien de esa agrupación y no de cada Estado, respondiendo a necesidades comunes, aplicándolo con la misma fuerza dentro del territorio regional y sobre todos los nacionales.

La comunidad internacional para que opere requiere que los Estados que la conforman en el caso concreto de la CAN, deleguen en forma voluntaria algunas facultades que le permita desarrollar sus objetivos de integración. Y como lo vimos y seguiremos analizando más adelante, no existe la delegación de competencia material en el aspecto tributario a ninguno de los órganos de integración, y mucho menos el poder (COMPETENCIA) al Parlamento Andino que estaría autorizado a ser el que dicte, modifique y derogue leyes.

Por este particular muy importante, no es posible la aplicación inmediata y directa del derecho comunitario derivado, observando varias acciones de incumplimiento planteadas ante el Tribunal Andino de Justicia. (Anexo)

D.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD:

Conocido también como el de seguridad jurídica en el derecho tributario; nutriendo al derecho en general y en particular el Tributario, de certeza. Es decir los tributos deben ser regulados mediante Ley, creada, reformada y derogada por el órgano competente para ello que es, el Poder Legislativo; observando principios como la irretroactividad de la Ley y la racionalidad.



Principio que descansa en la exigencia de que sea el pueblo o sus representantes los que intervengan en el dictado de actos de poder público, ya que en materia tributaria se pretende obtener del patrimonio de los particulares, los recursos para el cumplimiento de los fines del Estado o de la comunidad.

Al respecto Fernando Pérez Royo expresa:

“Es necesario una Ley formal para el establecimiento del tributo “. (6)

Para el jurisconsulto Pérez Royo, este principio es sinónimo de la Reserva de Ley.

El doctor José Vicente Troya Jaramillo nos dice al respecto “antes de hablar de una limitación, es un modo de cómo se ha de ejercer la potestad tributaria. “ (7)

.....

6.- PLAZAS Vega Mauricio Principio NulumTributun Sine Lege y la Armonización Tributaria Andina Conferencia Colombiana, pág. 613

.....

7.- TROYA Jaramillo José, Teoría General de los Tributos, Fundamentos de Derecho Tributario, Cuenca, 2004.



Ya en el ámbito de la CAN, las leyes, las decisiones que dictan sus órganos, no gozan de la totalidad de esta competencia, por lo que ha sufrido constantes violaciones, como ya lo indicamos en capítulos anteriores, de coacción legal para su aplicación en el ordenamiento interno; situación que se seguirá suscitando mientras el Parlamento Andino supra estatal no sea integrado por cuatro parlamentarios de cada país, elegidos por medio de sufragio de sus nacionales; (resolución que ha sido acatada en la actualidad por Colombia, Ecuador y Perú; faltando solo Bolivia que los elegirá en el año 2015).

Por lo que mal podría hablarse de que el parlamento tiene competencia absoluta, poder tributario para dictar leyes, normas de ordenamiento jurídico en general, y mucho menos en lo relacionado a los tributos, ya que nos asiste derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales y en nuestras constituciones.

En materia Tributaria que afecta al patrimonio de las personas y hasta que no se establezca el Poder Legislativo Andino, no se podrá crear leyes de aplicación directa, inmediata, efectiva y será constante estas actitudes perturbadoras por parte de los países miembros, así como la coacción legal por parte del Tribunal de Justicia para su cumplimiento.. Principio que va de la mano con los Principios Nullum Tributum Sine Lege, el de igualdad en materia tributaria, la capacidad contributiva, progresividad de la imposición, la generalidad tributaria, la no confiscatoriedad de los tributos.

Y con más razón si vemos que a nivel interno las Constituciones autorizan-facultan-delegan a otros órganos con potestad,



para que implemente tasas, contribuciones de mejoras, como es el caso de Ecuador, Art. 264 numeral 5- 270- 287- 301; Ley de Régimen Municipal. Colombia en sus Art. 300, numeral 4 de la Carta Magna; Perú Art. 195, numeral 4 de la Constitución.

Es y será sólo la Ley la que establezca los tributos, así como sus elementos esenciales como el objeto, la cantidad de la prestación, la determinación de los sujetos, las obligaciones tributarias. Siendo esta Ley la expresión de la voluntad soberana (el pueblo), quien la ejerce de manera indirecta a través de sus representantes, tal sería el caso del Parlamento supra estatal.

Es decir el régimen tributario se rige por el principio de legalidad, de manera que no hay tributo sin la existencia de una ley previa, principio consagrado en las Constituciones de los cuatro países miembros de la CAN, enunciare los artículos para referencia;

Bolivia. 26, 59, 112, 66, 201.

Colombia. 114, 150, 189, 300, 338.

Perú. 74, 79, 102, 118, 192, 193.

Chile. 32 numeral 22.

Ecuador. 301, 132 numeral 3, 135.

Este principio, para algunos tratadistas radicales, estaría afectado por la declaración por parte de la Comunidad Andina en el sentido de que las normas, regulaciones y decisiones gozan de los principios de aplicación inmediata.

E-. RESERVA DE LEY



Principio que desde la óptica de los países miembros hace referencia al hecho de que las normas, en especial a las tributarias que es el tema que nos ocupa, deben ser creadas, reformadas y derogadas por el órgano con poder- potestad tributaria, que es el Congreso del Estado y por delegación constitucional en ciertas materias el Ejecutivo y los gobiernos Seccionales y provinciales en el caso de nuestro país.

La reserva de ley en materia tributaria establece que únicamente la ley puede crear tributos y en ella debe establecerse tanto los elementos objetivos como subjetivos, por lo que deberemos ser nosotros los que participemos en la toma de esta decisión a través de nuestros representantes a nivel de país y aun más de una comunidad de integración, en la que no podemos hablar con propiedad de un parlamento andino integrado como manda el propio Tratado Constitutivo del Acuerdo de Cartagena y mucho menos con competencia legislativa.

A nivel de la CAN si se viola el mismo, en el sentido de que las decisiones, que si bien tienen el propósito loable de seguir adelante con el proceso de integración regional, no son dictadas por el ORGANO COMPETENTE QUE REPRESENTA A TODOS LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD.

De ahí que las diversas cartas magnas de los países miembros lo establecen en su normativa que enunciaremos:

Perú Art. 14

Colombia Art.363, 313, 150.



Ecuador Art.120 numeral 7.

Chile Art.32 numeral 22.

Bolivia Art. 228

Para el doctor Mauricio Plazas Vega “sólo la Ley es el cauce del poder tributario, su reconocimiento en el orden comunitario sólo es factible de manera relativa y depende de su desarrollo en el ámbito interno, conformación de órganos colegiados de representación popular con alcance supranacional que ostenten la facultad de crear derecho legislado” (8)

Las Constituciones de los cuatro países (Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia), no han delegado en forma expresa a ningún organismo que conforman la Comunidad de Naciones Andina (CAN), competencia para legislar en torno a cualquier asunto comunitario y mas precisamente a esta materia (tributaria).

Si bien la Comisión de la CAN es el órgano normativo con legitimidad otorgada en la creación de la CAN, este no goza de representatividad democrática, ya que está integrado por representantes enviados por cada gobierno, como así también ocurre con los demás organismos, e incluso el Parlamento Andino, por lo que observamos en varias ocasiones, el no cumplimiento en forma voluntaria de las decisiones.

.....
(8) Plazas Vega Mauricio Reserva de Ley de los Tributos y Derecho Comunitario, pág. 15.



Los Estados por disposición constitucional pueden atribuir competencias a los organismos supranacionales, el ejercicio del poder tributario originario, pero con sujeción al principio de legalidad “nullum tributum sine lege”.

Por lo que las decisiones dictadas por la CAN, no tienen fuerza legal-obligatoria, tanto es que sólo hace un llamado a los Estados miembros para que en los plazos señalados, armonicen las disposiciones internas a lo establecido en la norma comunitaria derivada.

Las Constituciones de esta comunidad de naciones, señalan claramente que es sólo el poder legislativo, conformado en ciertos casos por dos cámaras o sólo por una, el que está facultado, es competente para crear y derogar las leyes.

Así lo establecen los siguientes artículos:

Colombia.- 150, numeral 12, 153 y 157.

Ecuador.- 118, 120 numeral 6, 127, 132, 134, 136.

Perú.- 56, 74, artículo modificado por Ley 28390 de 17 noviembre del 2004, 79 y 102 numeral 1 y 3,

Bolivia.- 250.

Chile.- 19, 20, 32 No.8; 50, numeral 1 y 2, 60 No. 14 y 62 inciso 4 No. 1.



CAPITULO III

EL PODER LEGISLATIVO EXTRATERRITORIAL

- 3.1.- Corrientes internacionales respecto del poder legislativo tributario internacional.***
- 3.2.- Avances respecto de la legislación tributaria comunitaria en la CAN.***
- 3.3.- Relación de la legislación tributaria comunitaria con las Constituciones de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones***
- 3.4.- Posición de los países miembros de la CAN.***



Corrientes internacionales respecto del poder legislativo tributario internacional

Al ser la Comunidad Andina de Naciones un grupo unido con personería jurídica internacional, su derecho comunitario sea el originario o derivado, es aplicado por todos los Estados miembros; limitando y modificando las normas Nacionales y las tributarias.

Dentro del estudio del Derecho Comparado, respecto del derecho internacional encontramos dos corrientes:

a.- El Dualismo: que sostiene la supremacía constitucional, no pudiendo haber discusión entre el derecho nacional con el internacional, y

b.- El Monismo: sosteniendo la Supremacía de los Tratados Internacionales, lo que implica que irrumpen dentro del derecho interno de los Estados, estando por encima o a la par de la Constitución.

Señalaré brevemente las corrientes respecto de la aplicación o no del Derecho Internacional en las legislaciones de los Estados, para así poder explicar y entender los diferentes puntos de vista respecto del poder legislativo internacional.

1. Países como los Estados Unidos y algunos europeos, exclusivamente aplican su derecho interno y por excepción el Internacional, siempre y cuando no contravenga su derecho interno; es decir son defensores de la teoría Dualista que establece la supremacía de las Constituciones.



2.- Se aplica el Derecho Internacional Tributario sólo en casos excepcionales, cuando su Ley interna se remite a ella como así lo ha establecido expresamente en sus constituciones Irlanda y Chipre.

3.-Países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, quienes han adoptado el criterio de aplicación directa e inmediata de las normas de esta organización regional, aunque sea aplicada de manera parcial dada sus casos de incumplimiento de las mismas.

Partiendo de estas premisas, debemos decir que realmente no existe un verdadero Poder Legislativo extraterritorial, y mucho menos en lo que se refiere a la Tributación. Aspecto tan delicado desde el aspecto fiscal, económico, jurídico, y principalmente político.

Debemos decir rápidamente que ni la Unión Europea ha conseguido plasmar un Parlamento con un verdadero poder legislativo en un ciento por ciento, aunque avanzado mucho respecto del parlamento andino.

La razón que exponen los diferentes países a nivel mundial o las organizaciones regionales, multilaterales, para esbozar reparos a la hora de aplicar las normas derivadas de estos acuerdos, que coadyuvan a ver cada vez más lejanos los objetivos para consolidar una verdadera legislación supranacional son:

- La norma para que tenga fuerza y poder al que se sometan los pueblos, debe nacer de la Ley creada por el poder legislativo nacional o regional en aplicación al principio de “legalidad y reserva de Ley”, por lo que será únicamente la Ley Tributaria nacional o supranacional la que fije el criterio distributivo de los gastos públicos y sus elementos como su cuantía



el hecho Imponible, sujeto pasivo, sujeto activo; así también de acuerdo al principio internacional, constitucional, tributario y penal “Nullun Crimen Nullum Pena sine Lage”.

- Mundialmente está reconocido un poder legislativo quien crea, deroga, modifica las normas de un Estado u Organismo Internacional, el que está conformado por representantes del pueblo, elegidos por sufragio universal, permitiendo de esta manera que seamos todos los ciudadanos los que participemos en forma indirecta en la producción del derecho nacional o regional.
- Limitación de la soberanía; los países al pertenecer a una organización internacional, se someten a un derecho que no es ni nacional, ni internacional; es un derecho especial, un orden jurídico comunitario con sus propias características; lo que conlleva a que este derecho este por arriba de las Constituciones de los Estados miembros, siempre y cuando éstos, cedan mediante su norma constitucional parte de esa soberanía, no solo para afectar la esfera de lo legal, sino también lo social, económico, financiero, pero ya en un ámbito regional, supranacional, es decir en función de grupo, como es el caso de la CAN. Pero como veremos más adelante, sólo dos miembros de la Comunidad de Naciones, establece la posibilidad de esta acción, como lo son Bolivia y Colombia.

Avances respecto de la legislación tributaria comunitaria en la CAN.

Ya en el ámbito de estudio que nos compete analizar, La CAN, podemos señalar que este poder legislativo extraterritorial, no existe propiamente dicho, por varias premisas:



Empecemos por señalar que no existe un Parlamento Andino que posea un verdadero poder legislativo, con poderes tributarios supranacionales, calidad que la tendrá cuando seamos los ciudadanos que conformamos esta organización (115'000.000 de habitantes) los que le demos esa calidad, eligiendo a sus miembros mediante sufragio. En el protocolo de creación del Acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina de Naciones de 1969, no se le concede esta facultad, por lo que desde su nacimiento surge limitado. En la reforma a éste, por el Protocolo de Cochabamba en 1996 en su Art. 4 obliga a los países miembros de la CAN a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, y a no implementar, ni adoptar medida alguna contraria a dichas normas que obstaculicen su aplicación.

Con el Protocolo de Trujillo de 1996, se modificó - amplió la cobertura de la obligatoriedad de las normas comunitarias derivadas, a las decisiones emanadas del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE), quienes de acuerdo al Art. 17 puede emitir declaraciones y decisiones, estas últimas pasan a formar parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Por lo que la regla de aplicación directa, es parcial en lo que atañe a la materia tributaria; pues sus disposiciones para ser instrumentalizadas requieren que se emita normas internas; en la práctica únicamente establecen criterios y orientan a las reglas tributarias nacionales.

Como observamos se establece facultades de dictar declaraciones y decisiones al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE).



Lo que si se ha avanzado en la CAN, es respecto a la armonización, concebida como un medio o instrumento que contribuye a los objetivos de la adopción y aplicación homogénea del ordenamiento jurídico; unificación con miras a intereses comunes de competitividad e integración económica; lo que significa que la carga tributaria dentro de los países debe ser igual para todos. Esta armonización ha sido con más fuerza en lo que a los tributos indirectos se refiere; ya analizando un poco la legislación de la CAN respecto de la armonización tenemos:

El Acuerdo de Cartagena respecto de la unificación de las legislaciones, en el Art. 3 establece:

Art. 3 “las aproximación de las legislaciones nacionales, en las materias pertinentes como uno de los mecanismos fundamentales para lograr los objetivos comunitarios”

La misma que requiere:

- a.- Un proceso de integración vinculante.
- b.- Determinar en forma precisa la etapa de integración, tomando en cuenta las estructuras tributarias de cada país y el tiempo para desarrollarla.
- c.- Evitar distorsiones.
- d.- Las disposiciones jurídicas nacionales deben desarrollarse de acuerdo al contexto del ordenamiento comunitario.
- e.- Las leyes internas no deben contradecir los rumbos del derecho comunitario.
- f.- Un ánimo abierto, decidido y una comprensión real de lo que es un mercado común en un entorno supranacional.



g.- La administración de los tributos debe ser de manera unificada.

Culminaré expresando que si no hay la predisposición de una unidad política que este encaminada a la decisión de igualar, homogenizar, armonizar las normas y no solo buscar la armonización en materia económica y social, el avance de la comunidad regional andina, será de lento alcance.

La Comunidad Andina en el ámbito del derecho supranacional, con las falencias ya analizadas, mira siempre a su objetivo, la uniformidad legislativa y de interpretación de sus normas; adoptando las siguientes teorías:

La Supremacía del Derecho Comunitario, El de Preeminencia, Efecto Directo y Aplicación Inmediata; lo que implica que no se puede anular los efectos del derecho comunitario por la sola voluntad de las partes; derecho que está por sobre la legislación interna de los Estados, el momento en que surja conflicto entre una ley nacional y la comunitaria, se aplica ésta; y por último la Ley internacional Andina se aplica en los territorios desde su promulgación en la gaceta oficial de la CAN.

La aplicación de las normas tributarias derivadas respecto de los tributos es de aplicación directa, de manera parcial, ya que las decisiones de la Comisión o del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, desplazan u orientan a la norma tributaria nacional, por lo que no requieren ni el pronunciamiento previo ni la aprobación por parte de los parlamentos nacionales, siempre y cuando la misma decisión no disponga lo contrario.

Estos principios consagrados en la Comunidad Andina de Naciones



son salvaguardados por el Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena a través de sus funciones de interpretación prejudicial, de nulidad y de incumplimiento; estableciéndose de esta manera la seguridad jurídica que requiere este organismo supranacional para seguir desarrollándose.

Relación de la legislación tributaria comunitaria con las Constituciones de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones

Primeramente veremos el procedimiento que los países miembros de la CAN, han establecido para la aprobación de los convenios internacionales, sean bilaterales o multilaterales, así tenemos que en forma general establecen:

Que es el Presidente de la República quien dirige las relaciones internacionales, celebrando y ratificando tratados y convenios que son sometidos a la aprobación del Congreso de la República. El tratamiento que se observa en cada país, es diferente, así tenemos:

Colombia.- La Corte Constitucional es la guardadora de la integridad y supremacía de la Constitución, por lo cual, de acuerdo al Art. 241, numeral 10 establece que decidirá definitivamente sobre la asequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben; siendo este control preventivo y obligatorio.

Es decir, una vez conocido el proyecto por el poder legislativo, es enviado al ejecutivo quien lo remite a la Corte en el término de 6 días siguientes a la sanción de la Ley. Si el dictamen es favorable el gobierno realizará el canje de notas, caso contrario no será ratificado; solo se pronunciará en el sentido de la reserva. (Es un control del proyecto no del convenio). Podemos enunciar que las fases son las siguientes:



Firma del tratado, aprobación por parte del congreso, sanción presidencial de la Ley probatoria, revisión constitucional, y canjes de instrumentos de ratificación.

En la legislación Colombiana se ha establecido que se puede dar la posibilidad de una aplicación provisional de un tratado que haga referencia a temas sobre economía y comercio, si el mismo es declarado violatorio a la norma suprema se suspende su aplicación. Así el Art. 224 expresa:

“Los tratados para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.”

Bolivia.- Es igualmente el Tribunal Constitucional el encargado de controlar la constitucionalidad del orden jurídico. Así tenemos que el Art. 120 sobre las atribuciones en su numeral 4 establece que es el competente para conocer:

“Los recursos contra los tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones, creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta Constitución “

No. 9 “La constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos extranjeros u organismos internacionales “



Cuando resulta que la norma comunitaria es violatoria a la carta magna, declara inaplicable la misma, por lo que quedaría vedada la posibilidad de buscar la reforma de la constitución para poder incorporar el derecho internacional.

Ecuador.- Una vez que el Presidente ha ratificado un tratado u otro instrumento internacional; informa o notifica a la Asamblea Nacional de manera inmediata precisando su carácter y contenido. La Asamblea Nacional deberá aprobar el mismo en forma obligatoria cuando se refiera a:

- 1.- Tratados de límites o materia territorial.
- 2.- Tratados referentes a alianzas políticas o militares.
- 3.- Tratados de compromiso para expedir, modificar o derogar una Ley.
- 4.- Tratados que se refieran a derechos y garantías constitucionales.
- 5.- Tratados referentes a la política económica del Estado.
- 6.- Tratados que comprometan al País en acuerdos de integración y de comercio.
- 7.- Tratados que atribuyan a un organismo internacional o supranacional competencias de orden jurídico interno.
- 8.- Tratados que comprometan el patrimonio natural como es el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.

Cuando la Asamblea Nacional lo haya aprobado en los casos enunciados anteriormente en un solo debate con el voto de la mayoría, previo el informe de la Corte Constitucional de la República, (quien es la encargado de velar por que las normas, leyes, tratados y convenios se



sometan a la Constitución), respecto de que si en el tratado se ha observado o no la Norma Suprema, se procederá al canje o depósito. En caso de que no sea así, se tendrá que discutir nuevamente o si no, de acuerdo a la doctrina monista moderado de la soberanía, se procedería a la reforma constitucional.

En los demás casos que se encuentran fuera de los establecidos en el Art. 419 numerales uno al ocho, el tratado será ratificado diez días después que la Asamblea haya sido notificada con el mismo, realizando el canje y enviando el instrumento internacional a ser promulgado en el Registro Oficial, y pasa a formar parte del ordenamiento jurídico nacional, prevaleciendo sobre las normas y leyes de menor jerarquía; es decir está por debajo y no con rango de la Constitución.

En la legislación ecuatoriana se da el control constitucional de los convenios o tratados a través del Corte Constitucional; pero a nivel interno es la función judicial la que puede declarar inaplicable una norma, ya sea de oficio o a petición de parte, cuando se viole la constitución o tratados y convenios internacionales. E incluso si existe contradicción entre la misma y un convenio, se aplicará la Norma Suprema.

Art. 424, 425, 428, 429, 436, 438.

Perú.- Igualmente se da un control jurídico interno de las normas en general y tributario en particular a través de los jueces judiciales, y es el Tribunal Constitucional, el que guarda la compatibilidad de la Ley con la Carta Magna, como así lo señala el artículo 202. Es decir hablamos que se da un control dual de las leyes.



Una vez que el Presidente ha firmado el tratado, este tiene que ser aprobado por el Congreso (como vemos no existe el trámite previo ni obligatorio de que sea analizado por el Tribunal Constitucional), y si es positivo el mismo será ratificado. Esta aprobación es obligatoria en los tratados que creen, modifiquen o supriman tributos, cuando se modifique o derogue una ley.

Si el compromiso afecta disposiciones constitucionales, se someterá al trámite que se da para la reforma constitucional, es decir, aprobada por el congreso por mayoría absoluta de sus miembros, y ratificada mediante referéndum, o, cuando el tema haya sido tratado y aprobado en dos sesiones ordinarias sucesivas y con una votación superior a dos tercios de los congresistas.

Chile.- Se procede al control de la constitucionalidad de los convenios que pasa por dos etapas:

1.- La sala constitucional de la Función Judicial, que posee un control concentrado de la constitucionalidad, declarando inaplicable esa norma a nivel interno, y

2.- El Tribunal Constitucional, que goza de competencia para resolver cuestiones de inconstitucionalidad de proyectos de reformas a la Ley suprema, control preventivo y obligatorio de constitucionalidad de las leyes orgánicas y decretos, así como el control previo de los tratados internacionales, antes de ser ratificados.



Chile permite a través de su Constitución que un convenio al ser incorporado al ordenamiento jurídico del Estado, debe ser aplicado y acatadas preferentemente a cualquier norma interna e incluida la Constitución. Visión que concuerda con el principio Pacta Sunt Servanda.

Trámite similar al de los demás países de la Can, con la salvedad que este control será **Preventivo pero Facultativo**.

Respecto a Venezuela, que ha decidido retirarse de la Comunidad Andina por divergencias netamente políticas no creo que revea su decisión puesto que ni Perú ni Colombia declinarán de su disposición a ratificar un TLC con los Estados Unidos de Norteamérica, por ello no analizaremos su realidad.

La incorporación de los tratados internacionales, sean bilaterales, multilaterales, regionales o continentales, se lo realice a través de una ley ordinaria, careciendo del rango de norma constitucional, por lo que una vez incorporada al ordenamiento interno, esta por sobre las leyes de menor jerarquía, pero por debajo de la Carta Magna; siendo susceptible de incumplir los compromisos internacionales y ser sujetos de demandas por incumplir principios consagrados no solo en ella, sino, en los convenios a nivel mundial.

Por lo que la seguridad jurídica del derecho comunitario habría que buscarla a través de reformas constitucionales, que permitan que el mismo tenga ese rango; hasta mientras se sustenta en la doctrina del principio Pacta Sunt Servanda y la posibilidad real de que el incumplimiento de estos tratados, sean sancionados.



POSICION DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA CAN.- Como observamos existe la renuencia de los miembros de esta comunidad regional en avanzar hacia la extraterritorialidad de su derecho, la creación de un derecho supranacional. Daremos un breve vistazo a la posición de los países miembros de la CAN respecto de esta posibilidad.

Como ya lo establecimos la Reserva de Ley, hace referencia a que se debe observar el trámite constitucional señalado para la creación y derogación de las leyes en general y específicamente la tributaria. Lo que conlleva que deberá existir certeza en lo relacionado con los elementos esenciales del tributo Renta- IVA- ICE.

Este principio mas el de Legalidad, son la piedra fundamental, que condicionan la producción de normas tributarias o la constitucionalidad o inaplicabilidad de las disposiciones.

Ninguna Constitución no ha delegado o cedido competencias a ningún órgano para que pueda legislar en relación a la materia tributaria, con el objetivo supremo de buscar y alcanzar la armonización de la Renta-IVA- ICE, y más aún una legislación supranacional.

Señalaremos que en la última constitución vigente de Bolivia, se ha establecido en el Art. **258 cuarta parte, título VIII, capítulo primero:** Relaciones Internacionales, que se requerirá la aprobación mediante referéndum popular vinculante para que se pueda ratificar tratados internacionales que implique.. 4.- cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales, en el marco de procesos de integración. Como podemos observar es este país pequeño y atrasado en desarrollo, es el que está dando la pauta a nivel del pacto andino para que se consolide esta cesión de competencias.



Frente al derecho originario de la CAN, no hay inconvenientes ya que son implementados a nuestras legislaciones mediante un procedimiento constitucional y de ratificación; frente al valor jurídico de las decisiones emanadas por los organismos de la CAN y que no poseen competencia, sus países miembros han adoptando las siguientes posiciones:

Colombia.- De acuerdo a la doctrina, las decisiones tienen el mismo rango que el tratado, ya que responde a una misma obligación.

Chile.- Muy respetuosos de los compromisos internacionales adquirido, las acatan.

Perú.- Respecto del derecho comunitario derivado, establece que deberá seguir la suerte del primario, por cuanto sólo se reafirma un deber, no lo crea.

Ecuador.- Si bien la Constitución nada dice al respecto del tratamiento que se debe dar a las decisiones de la CAN, es el proceder de nuestra legislación acatar las mismas, sin necesidad de incorporarlo a través del proceso legislativo, a menos que la disposición derivada lo señale.

Bolivia.- Al respecto su norma suprema, también presenta vacíos respecto de este tema, por lo que partiendo del Tratado del Acuerdo de Cartagena, Tratado Constitutivo del Tribunal Andino de Justicia, la jurisprudencia y los Tratados Ejecutivos, permite que las decisiones de la CAN sean de cumplimiento obligatorio y aplicación inmediata.

Como podemos apreciar, existe la disposición tibia de los gobiernos de avanzar hacia la integración regional, en forma paulatina;



observando trabas que deberán eliminar las propias Constituciones, y de reformar las leyes tributarias internas a los parámetros de las decisiones adoptadas y que deberían ya estar en plena vigencia, (como es el caso de Bolivia y Ecuador), la decisión de cumplir sus compromisos y acatar las mismas en forma inmediata y no esperar ser sujetos de llamados de atención por parte de los organismos de control. Tenemos dos Estados que permiten que se pueda encargar ciertas competencias a estos organismos supranacionales, como lo hace Colombia en su artículo 150 numeral 16 y 227 en su Constitución y Bolivia en su Art. 258.

Como vemos no se puede hablar todavía de un poder legislativo supranacional, falta el interés real de avanzar en este gran proyecto de la Comunidad Andina de Naciones, para lo cual debemos empezar todos los 115 millones de habitantes andinos, a pensar en función de una gran nación, una comunidad regional, caso contrario no avanzaremos; al inverso encontraremos tropiezos como la salida de Venezuela, la resistencia de Bolivia, la actitud de chantaje geopolítico en el que también está inmerso nuestro país, algunas reservas que mantiene Perú respecto del Arancel Externo Común, el incumplimiento por parte de todos de las normas comunitarias-decisiones.

Es decir, se debe si bien en forma ambiciosa pero firme y sosegada seguir avanzando en el camino trazado, sin tomar decisiones apresuradas, como el querer crear una moneda común o una nueva entidad regional como la UNASUR, cuando realmente aun no se ha podido llegar a una verdadera legislación extraterritorial, a una armonización total del IVA ni del Impuesto a la renta, la desigualdad de las diferentes economías del bloque, como es el caso de Bolivia que esta resistente a la liberación de los aranceles por cuanto vela por su economía; el llegar a una verdadera unificación legal.



CAPITULO IV

ANALISIS DE LA LEGISLACION DERIVADA DE LA CAN Y POSIBLES REFORMAS A INCLUIR

***4.1.- PROGRESOS DE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
DERIVADA DE LA CAN.***

***4.2.- ANÁLISIS DE LA DECISIÓN 578, RESPECTO DE LA
UNIÓN DE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA INTERNACIONAL***

***4.3.- ANÁLISIS DE LA DECISIÓN 599, Y SU EFECTIVA
APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS.***

***4.4.- ANÁLISIS DE LA DECISIÓN 600 Y SU EFECTIVA
APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS.***

***4.5.- REFORMAS A SER INTRODUCIDAS EN LA
CONSTITUCIÓN ECUATORIANA.***

4.6.- REFORMAS EN LA LEGISLACIÓN DERIVADA DE LA CAN



PROGRESOS DE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DERIVADA DE LA CAN.

A breves rasgos señalaré los alcances respecto del progreso que ha experimentado la legislación tributaria derivada de la Can y, en especial a lo que armonización se refiere.

Se ha logrado alcanzar varias metas, en diferentes áreas del quehacer humano como:

En migración se ha establecido normas que permiten la libre circulación de personas que transitan a largo o mediano plazo por los países de la subregión; así como también un trato igualitario con los trabajadores, creándose el Observatorio Laboral Andino, el encargado de velar por que se cumpla los lineamientos de la libre circulación y derechos de los trabajadores migrantes.

En el área de la comunicación, se ha creado un canal vía internet (TV CAN) por medio del cual podemos tener acceso a toda la información histórica y actual de la actividad desplegada por este organismo regional andino.

En lo cultural se ha adoptado la decisión 588 mediante la cual se establece el mecanismo para la cooperación de repatriación de los bienes patrimoniales culturales.

Se ha creado la Zona de libre comercio, permitiendo la libre circulación de mercaderías de los países de la subregión andina.



El arancel externo común, (que en la actualidad se encuentra suspendido, ya que lo que se busca es la integración total de los cuatro países miembros a él; incentivos para la exportación, programa de Liberación e Incentivo a las exportaciones Intra subregionales.

En el área de Aduanas, la CAN ha establecido instrumentos legales para facilitar un procedimiento común y armonizado en lo relacionado a estos servicios a nivel de la comunidad andina y con terceros países. Ha establecido normas de salvaguardias, antidumping y compensatorias.

En el ámbito de armonización se ha promovido la eliminación de subsidios a las exportaciones subregionales; los de naturaleza tributaria que en materia de los impuestos indirectos sería la devolución de estas tasas pagadas en la fabricación de bienes exportables; el instituir el principio del país de destino que rige las exportaciones; armonización de las exenciones que solo abarcaría las áreas o sectores de educación, salud, transporte terrestre de pasajeros y servicios de intermediación financiera; en lo que tiene que ver propiamente con la armonización tributaria se ha adoptado una tasa general del IVA, la misma que no puede ser menor de 5.7% y la máxima de 19%, y una preferencia que no podrá ser inferior al 30 % de la tasa general, orientado a seguir avanzando en la construcción de un mercado único armonizado; gravar los bienes en cada etapa de la producción, evitando la acumulación de impuestos sobre impuestos, facilitando la integración del comercio interregional; se define un arancel de 0% para los productos no producidos o de producción insuficiente; la exportación de bienes dentro de los países de la Can no pagan el impuesto indirecto (IVA.). La devolución del impuesto a los exportadores que lo cancelen



en la adquisición de materia prima, insumos intermedios, servicios, bienes de capital, consumidos en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización. Esta devolución se la realizara ya sea por compensación o reembolso.

Se esta avanzando en el dialogo sobre política fiscal, monetaria y cambiaria. Así se ha establecido normas que evitan la doble tributación fiscal; en lo referente al IVA, esta integración andina esta cada vez más cercana, ya que existen algunos puntos que van a permitirlo, como el que las legislaciones regulan este impuesto casi en forma homogénea, no teniendo diferencia abismales en su porcentaje, e incluso señalaré como síntesis la situación tributaria en Chile.

Chile que ha decidido reincorporarse a la Can, en su derecho establece:

1.- Los impuestos son, el de la Renta, IVA con un porcentaje del 18%, timbres y estampillas.

2.- IVA lo cancelan en los siguientes giros:

- a.- venta de bienes muebles en forma habitual.
- b.- servicios prestados por comerciantes, industriales y el arriendo.
- c.- Importación habitual o no.

3.- No paga IVA:

- a.- Transporte
- b.- Seguros de vida y contra terremotos.
- c.- Exportaciones.
- d.- venta de activos.



4.- Recuperabilidad del IVA:

- a.- En la venta de bienes de activo fijo.
- b.- En las exportaciones.
- c.- Transporte internacional aéreo, marítimo y de pasajeros.

El IVA lo cancelan en el precio neto, es decir lo paga el comprador del producto o servicio.

Por ultimo también se esta afianzando la relaciones internacionales no solo con países americanos a través de organismos como UNASUR, ALADI, Mercosur (formando parte los países asociados a la CAN) sino, también con países de otros continentes como la Unión Europea, China, Rusia, India, la OMC.

***ANÁLISIS DE LA DECISIÓN 578, RESPECTO DE LA UNIÓN DE LA
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA INTERNACIONAL.***

La presente decisión ha sido dictada para actualizar y reformar en ciertos numerales la decisión 40 (vigente), y también con el objetivo de Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal; figuras que hacen alusión a dos distorsiones que afectan no solo a la tributación nacional sino también a la internacional.

A breves rasgos la doble tributación implica una doble imposición, satisfacer un mismo tributo respecto de las actividades de una persona natural o jurídica en varios países a la vez, por lo que conlleva a ser demasiado carga tributaria, injusto y aleja la correcta marcha de las relaciones comerciales.



La evasión fiscal, tributaria o evasión de impuestos es una figura jurídica consistente en el impago voluntario de tributos establecidos por la Ley. Es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado como delito o como infracción administrativa en la mayoría de los ordenamientos; evasión es eludir, esquivar, escapar a un compromiso determinado; es el incumplimiento de una obligación total o parcial.

Como ya hemos esbozado brevemente se está dando paulatinamente la armonización de ciertas leyes a nivel de los países de la CAN, por lo que esta decisión es aplicable al impuesto de la Renta; sin embargo debo anotar que existe un avance lento dentro de la CAN para seguir trabajando en la armonización, por lo que observaremos una falta de armonía respecto de los rubros que implica este impuesto respecto de nuestra legislación.

Así tenemos que en Bolivia hablamos de un impuesto a la renta, en Colombia al patrimonio y las utilidades, en el Perú a los predios y patrimonio accionario, y en nuestro país a impuestos proporcionales.

Se procede a dar conceptos de algunos términos aceptados a nivel de la CAN y mundial, para llegar a establecer esa concordancia en el tratamiento de esta figura tributaria.

Se establece que las rentas de cualquier naturaleza serán gravadas en el lugar en que dichas rentas hayan sido producidas y exonerarlas en los demás países; es decir adopta el criterio de la Fuente respecto de los países del bloque andino, y dejando respecto de los otros países libertad para establecer su relación, así como el tratamiento igualitario respecto de las personas de cualquier nacionalidad domiciliada en cualquier país comunitario.



Criterio de la fuente que es aplicable a varios giros de negocios como las rentas de bienes inmuebles, la explotación de recursos naturales, actividades empresariales, regalías, ganancias de capital, prestación de servicios profesionales, pensiones y anualidades.

Vemos que se establece igualmente el criterio del domicilio, respecto de las empresas de transporte, de los dividendos y participaciones, existiendo una contradicción con el criterio de la fuente.

En lo que se refiere al patrimonio, se establece el criterio de la territorialidad-fuente.

En materia de cooperación, consultas e información, se ha regulado en el Art. 19 de la decisión y dentro de los objetivos a alcanzar en el periodo 2009-2010 es precisamente ahondar en esta tarea, mediante una agenda de trabajo constante de comunicación, reuniones entre los diferentes sectores- áreas de la comunidad andina como: municipalidades, ministros de defensa, de economía, de relaciones exteriores, comunicaciones.

En esta decisión que complementa la 40, se ha creado artículos como la interpretación que se la dará respecto de los países miembros, dejando en libertad a todos sus miembros de velar en forma individual por las medidas que ellos crean convenientes para asegurar aun más que se evite la Doble tributación y la evasión fiscal; así como la asistencia entre las diferentes administraciones tributarias para poder perseguir a los deudores del fisco, regulando los gastos de esta actividad.



Vigencia en nuestro país: Al respecto podemos decir que del análisis entre esta decisión y la Ley de Régimen Tributario Interno en su sección Impuesto a la Renta, observamos que en lo poco que regula nuestra legislación acoge las directrices de la misma como:

- Primeramente acoge el criterio de la fuente,
- El cruce de información entre los países miembros de la Can para la aplicación del impuesto y así evitar la doble imposición.
- Empresas asociadas o relacionadas-precios de transferencia, estableciendo por regla general que si ya a cancelado el impuesto en un país miembro esta exento en el otro, o se cobrara la parte proporcional que le corresponde; y se detalla los requisitos para aplicar la figura de empresas relacionadas entre sí, innumerado del Art. 15 de la Ley de Régimen Tributario.
- En lo que se refiere a la prestación de servicios profesionales.- serán gravados en el territorio donde prestan sus servicios profesionales sea de consultoría, técnicos; excepto salarios percibidos por ejercer funciones oficiales, y tripulación de naves, aeronaves y otros de transporte internacional.
- En cuanto a los beneficios empresariales, serán gravados en el territorio donde se produzca el beneficio del servicio, que se presume es donde se imputa y registra el gasto.

Si observamos lo que nuestro país no cumple con respecto de esta decisión, podemos prestar atención que lo poco que se a regulado se esta acatando, sin embargo como es un complemento a la decisión 40, podemos decir que nuestro país no está cumpliéndola, y puede ser



en los próximos año demandado por incumplimiento de las mismas, siendo sujeto de sanciones por parte del Tribunal de Justicia de la Can en caso de que sea demandado ya sea por parte de uno de sus miembros y de algún habitante de la región andina. Así tenemos que con las reformas tributarias dictadas en el año 2007, 2009, el Código de la Producción, se sigue y se ha ampliado incluso figuras tributarias como las exenciones, exoneraciones a inversiones financieras mayores a un año; deducciones como el de vivienda, educación y salud hasta en un cincuenta por ciento, herencias hasta un cierto tope, en función de nuevos empleos siempre que conste por lo menos seis meses en nomina, a la tasa corporativa del 25 al 15% para utilidades a reinvertirse solo en equipos y maquinaria nueva; así como las devoluciones como a la ONG"s, sigue en vigencia el crédito tributario; (y en vigencia la aplicación del Código de la Producción en el que se avizora aun mas incentivos tributarios); nuevos impuestos como el que se establece a las tierras rurales; la elevación de la escala de tasa de Impuesto a la Renta a 35%; lo que implica no estar acatando al cien por ciento la disposición 578 que complementa a la 40 de la Can.

ANÁLISIS DE LA DECISIÓN 599, Y SU EFECTIVA APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS.

- Armonización de Aspectos Substantiales y Procedimentales del Impuesto Tipo Valor Agregado.

Su objetivo es garantizar la armonización de la política tributaria, evitando introducir obstáculos al comercio intracomunitario, otorgando de esta manera mayor seguridad jurídica y estabilidad a los regímenes tributarios nacionales.



Estrategia que deberá ser realizada en forma paulatina y gradual en el territorio de los países miembros de la Can; las mismas que se enfocan en los siguientes aspectos:

* Armonización de los impuestos indirectos al consumo, comprendiendo tanto el IVA como el ICE, de ahí que se realizara en la venta-transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios en el territorio nacional e impuesto a los bienes corporales. Medida a ser aplicada por los países comunitarios en un plazo de 10 años desde que sea aprobada la misma.

* Se norma las tasas de este impuesto que será la mínima de 5.7% y la máxima de 19%, y una preferencial que no podrá ser inferior al 30 % de la tasa general al gravar los bienes y servicios exclusivos, y la tasa cero para las exportaciones de bienes y servicios. Estableciendo el plazo de diez y 5 años respectivamente para que acoplen los países su legislación interna a la presente decisión.

* Adopta el principio de la imposición en el país de destino para las importaciones de bienes, así como se señala los bienes exportables sujetos a tarifa cero. Anexo.

* Se establece las actividades que no estarán grabadas por el IVA como:

- 1.- La venta de negocios.
- 2.- La transferencia de bienes por sucesión.
- 3.- Cesión o transferencia de acciones o títulos valores.
- 4.- El aporte consistente en bienes a sociedades realizada por personas que no están sujetos a impuesto.



Al respecto hay que destacar que existe contradicción con la disposición transitoria, la misma que permite que los Estados sigan gravando estos rubros, si en su legislación interior así lo establece; lo que significaría que aun no existe la disposición real de alcanzar la armonización en este aspecto.

* También se regula las únicas exclusiones en relación a los bienes como :

1.- Los importados por misiones diplomáticas, consulares debidamente acreditadas.

2. Los importados por organismos internacionales debidamente acreditados.

3. Los que han sido donados al sector publico u organizaciones privadas sin animo de lucro para la salud, educación, y los que sean para utilidad común. Y

4. El equipaje.

* La cancelación del IVA se lo realizará por los servicios prestados por las personas no residentes ni domiciliadas en cualquier Estado andino; en los de construcción cada país establecerá la base imponible; en la venta de bienes inmuebles se cancela el impuesto solo en la primera venta. Pero al igual que la transitoria anterior permite que sigan gravando las ventas de los inmuebles las veces que lo realicen. Por lo que se observa que aun no existe la disposición seria de pensar en función de una comunidad.



* Se regula las condiciones de la exportación de servicios, que son:

- 1.- Que el exportador resida en el país de donde va a exportar.
- 2.- Que el beneficiario del servicio no tenga su domicilio en el país de exportación.
- 3.- Que el uso y aprovechamiento por parte del usuario tenga lugar en su totalidad en el extranjero.
- 4.- Que el impuesto que se pague no sea cargado como costo o gasto en el país exportador, por parte de la empresa o persona que desarrolla la actividad en el mismo.

Todos estos servicios se regirán por la tasa cero, teniendo el plazo de seis años después de entrada en vigencia esta decisión, para que la misma sea adoptada por los países miembros.

- En lo que tiene que ver con el transporte, se ha establecido lo siguiente:

- 1.- El transporte internacional de carga, encomienda y documentos, esta gravado con cero (0).
- 2.- El interno de pasajeros, paga el IVA en el país de embarque inicial.
- 3.- Transporte nacional de carga, excepto la aérea.
- 4.- Nacional de pasajeros, se rigen a las normas internas de cada país.

En la disposición transitoria se norma que si los países lo realizan de otra forma, lo pueden seguir realizando en lo que se refiere a la de carga internacional, y si se dan los cambios solo deben mirar a la



tasa cero. Que la carga internacional no gravada en las legislaciones internas, se le podrá imponer el impuesto distinto a la tarifa cero y después reformar al régimen cero. Contradicción absoluta, que merece de urgencia una reforma y seriedad en la toma de resoluciones.

En lo relacionado con el internacional de pasajeros y nacional de carga, que se este pagando IVA, podrán seguir haciéndolo hasta por 10 años.

* En cuanto a la caución del impuesto se establece que el mismo deberá ser cancelado:

1.- En la venta de bienes y prestación de servicios se lo hará el momento de la entrega total del bien o cuando haya terminado el servicio.

2.- En las importaciones, cuando sea nacionalizado el producto.

3.- En lo que respecta a los servicios prestados por los no residentes, al momento de prestarlo.

* En lo que atañe a la Base Imponible se establece:

a.- Que las erogaciones principales y accesorias, esta integrada por los gastos de acarreo, transporte, instalaciones, montaje, seguros, y gastos financieros.



b.- En las importaciones se lo realizara por el valor aduanero de la mercadería, derechos de impuestos aduaneros y toda erogación adicionales.

c.- En las permutas, será la base asignada a cada uno de los bienes y que genere para cada uno de las partes.

* Como una medida para lograr este avance económico/tributario se ha establecido la medida de que el IVA sea devuelto a los exportadores en la proporción que determinen los Estados, pudiendo observar otra forma de compensación alternativa, en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales no renovables.

En la transitoria se fija seis años plazos, para que si no devuelven, lo sigan haciendo, culminado este periodo tendrán que legislar en armonía a lo trazado en esta decisión.

* Además se prevé que podrán compensar este crédito tributario con deudas exigidas por la administración.

VIGENCIA la presente decisión tendrá vigencia cuando sea incorporada al derecho interno de cada país, cuando así lo prevea la Constitución de la República y tendrá plena vigencia el día del mes siguiente al depósito del instrumento en la Secretaria General de la Can.

Con respecto a la aplicación de esta decisión por parte de Ecuador, debemos anotar primeramente sus similitudes:



-
- El hecho generador.- grava la venta de bienes muebles y servicios.
- Principio.- que es utilizado el de destino, gravando las importaciones y excluyendo las exportaciones.
- Tasas.- nuestro país está dentro de lo establecido por la Decisión, es decir mantiene solo una tasa de 12%.
- Tasa cero.- en lo relacionado con las exportaciones y la devolución del impuesto como crédito tributario en un tiempo no mayor a noventa días.
- Declaración: Se lo realiza al mes siguiente de haberse producida o realizada la operación, estando dentro del límite que establece la decisión.
- Facturas.- Sus requisitos son los establecidos en la decisión.
- Bienes excluidos.- con tarifa cero en nuestro país: educación, salud, transporte nacional de pasajeros e intermediación financiera, aunque deberá nuestro país eliminar más servicios que están incluidos en esta tarifa para cumplir con lo establecido en la decisión.

Observando también que nuestro país en los años restantes 2014 hasta el 2018 tiene que adaptar nuestra legislación a la decisión en diferentes articulados como:

- La tarifa cero.- Art. 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se establece una larga lista de 12 numerales de bienes sujetos a esta tarifa.; cuando la decisión solo lo establece `para los bienes y servicios de exportación. Igualmente acontece con los servicios Art. 56 numerales veinte y tres.
- Las exenciones.- o exclusiones.- Art. 54. Estableciendo siete figuras, de las cuales solo dos se refiere a la decisión, las



donaciones al sector público y fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades.

- Las devoluciones del IVA.- a los discapacitados, a los establecimientos educativos religiosos.
- Figuras como el crédito tributario, el sistema simplificado RISE.

Lo que implica tener que trabajar en estos años que nos queda para la entrada en vigencia total de la decisión, en alcanzar la armonización de la legislación de nuestro IVA con la establecida en la Can.

ANÁLISIS DE LA DECISIÓN 600 Y SU EFECTIVA APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS.

Se refiere a la Armonización de los Impuestos Tipo Selectivo al Consumo, que grava la importación y el consumo en el mercado interno de bienes y servicios en forma individual o complementaria al IVA; grava a los artículos suntuarios o semisuntuarios (lujosos) a un porcentaje superior al del IVA.

Se establecen los sujetos pasivos, siendo:

- Los productores de bienes gravados
- Importadores de bienes gravados
- Prestadores de servicios gravados
- Usuarios o destinatarios de servicios adquiridos a personas no domiciliadas en el país destinatario.



Cada país definirá la base imponible de este tributo; autoliquidándose en los formatos de cada país.

Se establece el trabajo de armonizar este tributo comenzando por los productos derivados de tabaco, cerveza y bebidas alcohólicas.

En lo que se refiere propiamente a la aplicación de esta norma derivada andina por parte de nuestro país, puedo señalar que cumple casi en su totalidad con los lineamientos de la decisión a través de la Ley de Régimen Tributario Interno, como:

- La naturaleza es gravar la importación y consumo de determinados bienes y servicios.
- El retiro de bienes para un fin distinto a la actividad gravada (no utilizable) no estará sujeta a tasa alguna.
- Los sujetos pasivos del tributo en sus dos primeros numerales, productores e importadores de bienes gravados y los que prestan servicios gravados.
- La declaración del impuesto será máximo el mes calendario siguiente al del periodo fiscal.
- La facturación se realiza en facturas que cumplen los requisitos determinados en la decisión 599.

Sin embargo, el 09 de julio del 2006 se expide la Decisión No. 635 que modifica la entrada en vigencia de las decisiones 599 y 600, estableciendo su aplicación inmediata y directa desde el 01 de enero del 2008, y como existen en las diferentes articulados periodos de gracias, el límite para la aplicación de las mismas en forma total sería entre los años 2013 y 2018. Pero nos hemos alejado de estar trabajando en este



ajuste a nuestra norma interna tributaria por lo que seremos incumplidos en este compromiso y sometidos a llamados de atención y de acciones por parte de los demás miembros e incluso de todos los habitantes comunitarios.

REFORMAS A SER INTRODUCIDAS EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA.

Haré un pequeño comentario de la Constitución de 1998 y la actual, en lo que respecta al derecho internacional y los convenios internacionales, para así proceder a plantear algunas reformas hacer introducidas en nuestra carta magna, para viabilizar la gran unión de la comunidad andina.

Nuestra Constitución anterior, la del año 1998, plasmaba en forma aun deficiente el acatamiento de los instrumentos internacionales, sean de cualquier naturaleza; ya que en el art. 4 se expresaba que “El Estado Ecuatoriano declara que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones reciprocas y promueve la solución de los conflictos por los métodos jurídicos y pacíficos”. Así también establecía que proclama la paz y la cooperación como sistema de convivencia y la igualdad jurídica de los estados. Propicia el desarrollo de la comunidad internacional, su estabilidad y fortalecimiento. En el Art. 5 miraba a fomentar asociaciones con uno o más Estados para la promoción y defensa de los intereses nacionales y comunitarios. En el Art. 18 se manifestaba que los derechos y garantías determinadas en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicados por y ante cualquier



juez, tribunal y autoridad. Art. 272 sobre la supremacía de la Constitución la misma que prevalece sobre cualquier otra norma legal, el 274 mandaba que una norma podrá ser declarada inaplicable de oficio o a petición de parte, cuando el precepto jurídico era contrario a las normas de la Constitución o Tratados y convenios Internacionales.

La Constitución actual del 2008, proclama en la sección de las relaciones internacionales en su capítulo primero, segundo y tercero, que nuestro país proclama la cooperación, integración, solidaridad, la paz, el desarme internacional. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, impulsa la integración política, cultural y económica de la Región Andina, de América del Sur y de Latinoamérica. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de los instrumentos internacionales pero para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.

Proclama que los tratados internacionales se sujetan a lo establecido en la Constitución, y serán suscritos o ratificados por el Presidente de la República, ratificación previa aprobación de la Asamblea Nacional y dictamen previo y vinculante de la Corte Constitucional.

Impulsa la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria, la unidad productiva, financiera y monetaria, la adopción de una política económica internacional común. Fortaleciendo la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos laboral, migratoria, fronteriza, ambiental, social, educativa, cultural y salud pública. Propicia la creación de la ciudadanía latinoamericana, la libre circulación de las personas en la región, y fortalecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional



en América Latina y el Caribe; (plasmando dicho mandato en la intervención de la UNASUR, las mesas de trabajo en el ámbito de la CAN, pero dejando de lado la preocupación de los asuntos de la CAN y más concretamente sobre la armonización).

Nada se dice respecto de las decisiones emitidas por los organismos de la CAN, lo cual lleva a que sea necesaria su regulación a nivel constitucional.

En el título noveno, capítulo primero, artículos 424 y 425 expresa que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma jurídica, así como en el orden jerárquico, establece en primer lugar la Constitución y en segundo lugar los Tratados y convenios internacionales.

Pero no deberá celebrarse tratados o instrumentos internacionales en los que nuestro país ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional; exceptuando los tratados e instrumentos internacionales en donde se establezca soluciones a estas controversias con Estados y ciudadanos en Latinoamérica, por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales designados por los países signatarios.

Una vez revisadas brevemente las dos Constituciones más recientes de nuestro país en lo que a relaciones internacionales se refiere, observamos que en ciertos puntos ha habido un adelanto significativo pero aun falta; debo plantear reformas que a mi juicio abrirían el camino para que el Ecuador ponga su granito de arena en el



desarrollo y avance de la Comunidad Andina de Naciones; no sin antes dejar sentado que sin la decisión política madura y consciente de los gobiernos de turno, no se podrá avanzar e incluso corremos el riesgo de que desaparezca la CAN, dada la atención prioritaria que se le está dando a la UNASUR.

Primeramente debo decir que existe dos corrientes respecto de si los Tratados Internacionales, están o no en el mismo rango que la Constitución. La primera corriente sostiene que la Constitución de nuestro país en su Art. 425 establece el orden jerárquico de aplicación, siendo en primer lugar la Constitución, en segundo los Tratados Internacionales, etc. La segunda corriente instituye que al ser los Tratados Internacionales ratificados y canjeados previo un trámite legal constitucional, y que pasa a formar parte del ordenamiento jurídico de nuestro país, debería estar al mismo nivel jerárquico de la Constitución; observando lo que asevera esta corriente en el Art. 424

Por lo que se debería dar un tratamiento de norma constitucional a los tratados y convenios internacionales sea del ámbito o razón que sea; estando en el primer lugar de la pirámide Kelseniana como lo está la Constitución, y se evitaría discusiones e incumplimientos reiterados del derecho internacional.

El **segundo punto** importante sería el reconocer expresamente la competencia legislativa que tiene el parlamento andino, y el sometimiento a los principios consagrados en el Acuerdo de Cartagena como son los de inmediatez, efecto directo y su aplicación inmediata. Siempre y cuando se cumpla la plena vigencia y competencia legal del parlamento andino.



En **tercer lugar** se debería regular la aplicación de las decisiones y resoluciones dictadas por la CAN, y recopilarlas en diferentes cuerpos legales para un conocimiento de las leyes del derecho internacional comunitario, así debemos agruparlas en derecho aduanero, tributario y a su vez impuestos directos, indirectos, suntuosos, municipales, etc.

En **cuarto lugar** debe establecerse la obligación constitucional de adaptar en un plazo determinado (claro esta debe ser el que conste para la entrada en vigencia de las decisiones) el derecho interno (código tributario y régimen tributario interno) a las disposiciones de la comunidad andina.

En **quinto lugar** la delegación de competencias a la CAN y al parlamento andino para que sean los órganos encargados de orientar una política económica supranacional, y que legisle, siempre y cuando esté constituido plenamente por representación popular.

En **sexto lugar** debe establecerse la situación del derecho internacional derivado de la comunidad andina.

REFORMAS EN LA LEGISLACIÓN DERIVADA DE LA CAN.

Frente a esta situación a ser analizada y resuelta, debemos partir que las decisiones son normas que se fundamentan en los tratados internacionales, que ayudan a viabilizar la ejecución de los mismos; y que como tal se debería con más propiedad hablar de reformas a nivel del derecho originario.



Se plantearía entre las reformas:

1.- La reforma a nivel del tratado constitutivo del Parlamento Andino, que le permita tener competencia privativa, para legislar y no sólo emitir recomendaciones, como así lo establece su Art. 13, y así se plasme la real posibilidad de que se pueda delegar ciertas prerrogativas a los órganos de la CAN, lo que no significa lesionar nuestra soberanía, sino una nueva forma de ejercerla. Lo que implicaría reformar también las atribuciones de los órganos comunitarios con poder legislativo no representativo popular. (Cesión racionalizada del poder).

2.- En lo que respecta a la creación de un sistema **unificado** y no sólo armonizado del IVA-Renta-ICE, primeramente como ya dije se debería partir de una reforma a nivel del Parlamento Andino, el que debe tener competencia legislativa, lo que implicaría la OBLIGACION de acatarlas sin reserva alguna, y no se daría la serie de incumplimientos que se han dado y seguirán produciéndose. Ya no se trataría únicamente de sugerencias a través de estas normas que si bien gozan como ya analizamos de los principios de inmediatez y aplicación directa, no son cumplidas a cabalidad, alegando otros principios como son los derechos humanos - la supremacía de la Constitución.

3.- Se complementaría con el compromiso plasmado en este acuerdo de que todos los países incluyan reforma constitucional que permita delegar ciertas potestades a los órganos supranacionales; cumplir a nivel interno con la elección de los parlamentarios andinos, por sufragio en las urnas; el compromiso no exclusivamente jurídico sino político de sus miembros para de una manera seria comprometerse con el adelanto y consolidación de la Comunidad.



4.- Se debe tomar en cuenta las necesidades fiscales internas de los países; sus deudas tanto internas como externas, sus debilidades en tecnología, calidad y cantidad de producción; su alto grado de importación y exportación; la facultad constitucional de organismos seccionales que pueden crear tributos como son las contribuciones de mejoras, tasas, e incluso los impuestos parafiscales; pero sobre todo una decisión política de todos los países miembros de este bloque andino de arribar a la tan ansiada armonización tributaria.

Lo que se traduciría en miras de establecer la delegación de competencias legislativas al parlamento andino- órgano legislativo comunitario -, y así comenzar a desarrollar una verdadera política económica, social y jurídica andina.

5.- Se debería establecer con claridad la situación jurídica de las decisiones emitidas por los órganos que las han dictado.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

1.- La armonización es el conjunto de normas que inciden en el sistema tributario de dos o más países, para así evitar distorsiones fiscales en los precios, en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

2.- El Parlamento Andino es el órgano que debería ser el competente para crear leyes; pero vemos que no posee la competencia legislativa que le corresponde. Y sus integrantes (parlamentarios andinos) no son elegidos por medio del voto popular, careciendo de la representación popular.

3.- En base a la premisa anterior, los ciudadanos podemos plantear el recurso de nulidad de las normas que violen, atenten contra derechos no sólo humanos sino legales reconocidas a nivel mundial. Ya que si no existe este poder y competencia tributaria, las mismas carecen de fuerza legal, y ahí el incumplimiento del derecho andino.

4.- No existe por parte de las Constituciones de los Estados Andinos, entre ellos Ecuador, la delegación explícita para que regulen la materia tributaria; es decir, no tienen competencia material.

5- Todavía no podemos hablar de la armonización-unificación de las legislaciones andinas, ya que las normas comunitarias originarias y derivadas lo que hacen es orientar a las legislaciones internas, y dejar sin efecto a estas, más no las deroga.



6.-Existe falta de seriedad en el cumplimiento del derecho andino y por lo tanto la presencia de fallos emitidos por la Corte Andina de Justicia de la CAN.

7.- En lo que respecta al IVA, Renta e ICE, no se ha normado todavía en forma uniforme los elementos que regulan este tributo, encontrando en los diferentes regímenes tributarios nacionales de los cuatro países diferencias que constituyen el gran obstáculo para desarrollar una legislación tributaria regional andina.

8.- El poco avance sobre la armonización en general y el tributario, se debe a la falta de un verdadero espíritu comunitario, en donde prime intereses colectivos y no unitarios de cada país.

9.- Los Estados de la CAN, han adoptado el criterio monista moderado, respecto de los convenios; lo que implica que la norma interna se adecuará al contenido del tratado, pero esta función corresponde al legislativo de cada gobierno.

10.- El derecho comunitario derivado se inserta en forma directa en el ordenamiento jurídico nacional, pero se da sus incumplimientos por parte de los países, precisamente por esta falta de competencia formal que le daría el ser dictado por el órgano legislativo andino.

11.- Las cartas magnas de los cuatro países andinos establecen que sólo el poder legislativo es el competente para crear, modificar y derogar las leyes, que por delegación constitucional esta prerrogativa lo tienen los gobiernos seccionales y en algunas materias el Presidente de la República.



12.- La Constitución Colombiana, Boliviana y ahora la nuestra en su artículo 419 numeral 7, esboza la intención de colaborar con el desarrollo de la comunidad latinoamericana y señala la posibilidad de delegar ciertas atribuciones a organismos supra regionales.

13.- Respecto del IVA, la Can ha adoptado el principio de destino, es decir se cancela el mismo en el lugar que se consume al bien o se presta el servicio.

14.-En las últimas decisiones emanadas de la comisión, se ha regulado únicamente cuatro exenciones del IVA, que son los de educación, salud, transporte terrestre de pasajeros y servicios de intermediación financiera;

15.- Se ha establecido un impuesto mínimo del 5.7%, una máxima de 19% y, una preferencial que no podrá ser inferior al 30 % de la tasa, con referencia al IVA en la Can.

16.- Se establece la devolución de esta tasa (IVA), pagado en la fabricación de bienes exportables.

17.- Nuestro país esta últimamente incumpliendo las decisiones estudiadas, al alejarse de los lineamientos de la Can con las leyes últimamente aprobadas como la de la producción y, régimen tributario interno.

18.- Existen órganos que expiden normas pero que carecen de competencia legislativa, como son el Concejo Presidencial Andino y el Concejo de Ministros de Relaciones Exteriores, decisiones que carecen de fuerza de Ley, dándose la serie de incumplimientos a las mismas.



19.- Se ha empezado ya a visualizar la cesión de competencias, como en el caso de Bolivia.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

SUGERENCIAS



SUGERENCIAS

1.- La decisión política de adaptar la norma interna a los lineamientos de las normas sobre la armonización indirecta, dictada por la comunidad; y no dictar leyes contrarias como ha ocurrido con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

2.- Que el poder tributario supranacional se consolide; primeramente estableciendo un verdadero órgano con competencia para legislar, creando y derogando leyes tributarias; unificar las normas de los estados hacia un mismo fin; siempre respetando los principios democrático y de reserva de Ley.

3.- Que haya la decisión y compromiso de los Estados (poder ejecutivo, legislativo, electoral) en la conformación de todos los órganos que conforman la Can, con absoluta competencia material; es decir la elección popular de sus representantes al Parlamento Andino, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; sólo así podremos hablar de un verdadero poder tributario supranacional y, los Estados no podrán incumplir los acuerdos.

4.- La armonización deberá llevarse adelante mediante la competencia compartida, ejercida por los órganos comunitarios y los nacionales; es decir debe haber un trabajo conjunto y armonizado entre éstas dos formas de poder.

5.- La gran problemática respecto de las decisiones, (que constituyen derecho comunitario derivado), se solucionaría si las mismas fueran reguladas en el Tratado Constitutivo del Acuerdo de Cartagena



(Carta Constitucional), el mismo que al ser modificado, requiere ser aprobado por el congreso de los cuatro países.

6.- Los Estados miembros deben reformar sus Constituciones con mira a regular el verdadero alcance que tendrá en la legislación interna las decisiones emanadas de los órganos de la CAN, mientras no sea el Parlamento Andino el que las dicte. Dado que no existe el órgano legislativo de esta comunidad regional, los Estados alegan la falta de Reserva de Ley de las mismas.

7.- La Comunidad Andina al poseer una Personería Jurídica de Derecho Público, un marco jurídico propio, auténtico, debe entre sus metas inmediatas conformar y poseer sus órganos tanto judicial como legislativo, con autoridad y competencia; consolidando de esta manera un verdadero derecho tributario comunitario, que pueda incluso regular sus propios impuestos, ingresos y la distribución de los mismos. Es decir un Estado comunitario conformado por los cuatro países, en donde no existan fronteras e intereses particulares.

8.- A nivel de integración, armonización-unificación legal tributaria, su avance debería contar con la participación mas activa de los legisladores nacionales, un control y seguimiento y difusión de los asuntos comunitarios. Ya que debido a esta falta de intervención observamos proyectos y Leyes que contravienen a las normas tributarias de la CAN, así como también la no existencia de una codificación de las mismas.

9.- Las decisiones respecto al IVA y al tipo selectivo (599-600), dejan al arbitrio de los Estados, la toma de medidas para reformar-modificar su legislación interna y adecuarla a la norma comunitaria; por



lo cual es urgente, repito nuevamente, darle la competencia necesaria al Parlamento Andino para que legisle. Cristalizando los principios del Derecho Tributario, Aplicación Inmediata, Preeminencia, y Efecto Directo en una realidad absoluta.

10.- Es urgente e indispensable que se reforme el tratado constitutivo del Parlamento Andino, para que se le permita tener competencia privativa para legislar y no sólo sugerir normas. Como ya lo expresé y vuelvo a decirlo, la falta de competencia legislativa privativa y su no conformación del parlamento por medio de participación popular de todos los nacionales de la región andina, es el principio del problema para que los países aleguen falta de legalidad, que se atenta contra el principio de Reserva de Ley, la inobservancia y violación de las normas dictadas por los órganos de la CAN.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

BIBLIOGRAFIA



BIBLIOGRAFIA

- 1.- *Constitución Política del Ecuador, año 1998*
- 2.- *Constitución de la República del Ecuador, año 2008*
- 3.- *Ley de Régimen Tributario Interno 2010*
- 4.- *Código Tributario 2010*
- 5.- *Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones.*
- 6.- *Patiño Ledesma Patricio, "Principios del Derecho Tributario y Régimen Tributario Administrativo", Colegio de Abogados del Azuay, Ecuador, febrero 2003*
- 7.- *Patiño Ledesma Patricio, "Sistema Tributario Ecuatoriano" tomo uno - 2003.*
- 8.- *Montaño Galarza Cesar, "Manuel de Derecho Tributario Internacional" Universidad Andina Simón Bolívar, Quito Ecuador 2006.*
- 9.- *Márquez Cordero Andrés" Estudio Armonizado y Razonado de la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento general de aplicación", Universidad del Azuay, Ecuador 2007.*
- 10.- *Troya Jaramillo José Vicente, "Derecho Internacional Tributario", Pudeleco editores S:A:, Quito Ecuador 2008*
- 11.- *Toscano Soria Luis, "Procedimientos Administrativos y Contenciosos en materia Tributaria", Pudeleco editores S:A:, Quito Ecuador 2006*
- 12.- *Toscano Soria Luis, "Nuevos Estudios sobre derecho tributario", Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, Quito Ecuador 2006.*
- 13.- *Asbún Jorge "Derecho Fiscal Mexicano", Editorial Themis 3 edicion- 1998*
- 14.- *Spisso Rodolfo R. "Derecho Constitucional Tributario", editorial de Palma, Argentina 1991.*



- 15.- Aimee Figueroa Neri *“Tópicos Fiscales Contemporáneos”*, editorial Cucea, México 2004.
- 16.- González Eusebio *“Tratado de derecho Tributario”*, editorial Temis S.A, tomo I, Colombia 2001.
- 17.- Plaza Vega Mario, *“ El Principio Nullum Tribute Sine Lege y la Armonización Tributaria Andina, Colombia.*
- 18.- Paredes Marat-Toledo Raúl, *“El Principio de Reserva de Le en materia Tributaria”*, editorial Porrúa, México 2001.
- 19.- Memoria XXII Jornadas latinoamericanas de Derecho tributario 2004 tomo II.
- 20.- Revista de debate social y jurídico. *“Asamblea Constituyente- otra Bolivia es posible”*, año IX. No.17, 01 de marzo del 2005.
- 21.- [www. La Can.](#)
- 22.- [www.americaeconomica.com/zonas/can.htm](#)
- 23.- [www.comunidadandina.org/](#) -
- 24.-[www.fmbolivia.com.bo/noticia31913-bolivia-recibe-residencia-pro-tempore-de-la-can.html](#)
- 25 .- [es.answers.yahoo.com](#) › ... › [Política y gobierno](#) › [Otros - Política y gobierno](#)
- 26.-[www.comunidadandina.org/quienes/colombia.htm](#) - [En caché](#) - [Similares](#)
- 27.[ww.comunidadandina.org/prensa/discursos/Genua_perucan.pdf](#)
- 28.- [es.answers.yahoo.com](#) › ... › [Ciencias sociales](#) › [Economía](#) - [En caché](#)
- 29.-
[http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/materia/140/deracj42/g110801.pdf](#)



ANEXOS

Decisión 578.

*PERIODO OCHENTA Y OCHO DE SESIONES
ORDINARIAS DE LA COMISION
4 de mayo de 2004
Lima - Perú*

DECISION 578

Régimen para evitar
la Doble Tributación y
Prevenir la Evasión
Fiscal

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los artículos 3, 22 literales a) y b), 30 literal c), 51 y 54 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 40 de la Comisión y el artículo 19 de la Decisión 292 de la Comisión;

CONSIDERANDO: Que es necesario eliminar la doble imposición a las actividades de las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en los Países Miembros de la Comunidad Andina, que actúan a nivel comunitario y establecer un esquema y reglas para la colaboración entre las administraciones tributarias con tal fin;

Que, asimismo, es indispensable actualizar las normas referentes a evitar la doble tributación entre los Países Miembros, con el fin de fomentar los intercambios entre los Países Miembros, atraer la inversión extranjera y prevenir la evasión fiscal;

DECIDE:

Establecer el presente:

RÉGIMEN PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL

CAPITULO I AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES GENERALES



Artículo 1.- Ámbito de Aplicación

La presente Decisión es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principalmente a los siguientes:

En Bolivia, Impuesto a la renta.

En Colombia, Impuesto a la renta.

En el Ecuador, Impuesto a la renta.

En el Perú, Impuesto a la renta.

En Venezuela, Impuesto sobre la renta e Impuesto a los activos empresariales.

Las normas previstas en esta Decisión tienen por objeto evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

La presente Decisión se aplicará también a las modificaciones que se introdujeran a los referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que, en razón de su base gravable o materia imponible, fuera esencial y económicamente análogo a los anteriormente citados y que fuere establecido por cualquiera de los Países Miembros con posterioridad a la publicación de esta Decisión.

Artículo 2.- Definiciones Generales

Para los efectos de la presente Decisión y a menos que en el texto se indique otra cosa:

- a) Los términos “Países Miembros” servirán para designar indistintamente a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
- b) La expresión “territorio de uno de los Países Miembros” significará indistintamente los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
- c) El término “persona” servirá para designar a:
 - 1. Una persona física o natural
 - 2. Una persona moral o jurídica
 - 3. Cualquier otra entidad o grupo de personas, asociadas o no, sujetas a responsabilidad tributaria.



- d) El término “empresa” significará una organización constituida por una o más personas que realiza una actividad lucrativa.
- e) Una persona física o natural será considerada domiciliada en el País Miembro en que tenga su residencia habitual.

Se entiende que una empresa está domiciliada en el País que señala su instrumento de constitución. Si no existe instrumento de constitución o éste no señala domicilio, la empresa se considerará domiciliada en el lugar donde se encuentre su administración efectiva.

Cuando, no obstante estas normas, no sea posible determinar el domicilio, las autoridades competentes de los Países Miembros interesados resolverán el caso de común acuerdo.

- f) La expresión “fuente productora” se refiere a la actividad, derecho o bien que genere o pueda generar una renta.
- g) La expresión “actividades empresariales” se refiere a actividades desarrolladas por empresas.
- h) Los términos “empresa de un País Miembro” y “empresa de otro País Miembro” significan una empresa domiciliada en uno u otro País Miembro.
- i) El término “regalía” se refiere a cualquier beneficio, valor o suma de dinero pagado por el uso o el derecho de uso de bienes intangibles, tales como marcas, patentes, licencias, conocimientos técnicos no patentados u otros conocimientos de similar naturaleza en el territorio de uno de los Países Miembros, incluyendo en particular los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales previstos en la Decisión 345 y los derechos de autor y derechos conexos comprendidos en la Decisión 351.
- j) La expresión “ganancias de capital” se refiere al beneficio obtenido por una persona en la enajenación de bienes que no adquiere, produce o enajena habitualmente dentro del giro ordinario de sus actividades.
- k) El término “pensión” significa un pago periódico hecho en consideración a servicios prestados o por daños padecidos, y el término “anualidad” significa una suma determinada de dinero pagadera periódicamente durante un lapso determinado a título gratuito o en compensación de una contraprestación realizada o apreciable en dinero.
- l) El término “intereses” significa los rendimientos de cualquier naturaleza, incluidos los rendimientos financieros de créditos, depósitos y captaciones realizados por entidades financieras privadas, con o sin



garantía hipotecaria, o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y especialmente, las rentas provenientes de fondos públicos (títulos emitidos por entidades del Estado) y bonos u obligaciones, incluidas las primas y premios relacionados con esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago atrasado no se considerarán intereses a efecto del presente articulado.

m) La expresión “autoridad competente” significa en el caso de:

Bolivia, el Ministro de Hacienda o su delegado.

Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

Ecuador, el Ministro de Economía y Finanzas o su delegado.

Perú, el Ministro de Economía y Finanzas o su delegado.

República Bolivariana de Venezuela, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) o su delegado.

CAPITULO II

IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 3.- Jurisdicción Tributaria

Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en esta Decisión.

Por tanto, los demás Países Miembros que, de conformidad con su legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas como exoneradas, para los efectos de la correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio.

Artículo 4.- Rentas provenientes de bienes inmuebles

Las rentas de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles sólo serán gravables por el País Miembro en el cual estén situados dichos bienes.

Artículo 5.- Rentas provenientes del derecho a explotar recursos naturales

Cualquier beneficio percibido por el arrendamiento o subarrendamiento o por la cesión o concesión del derecho a explotar o a utilizar en cualquier forma



los recursos naturales de uno de los Países Miembros, sólo será gravable por ese País Miembro.

Artículo 6.- Beneficios de las empresas

Los beneficios resultantes de las actividades empresariales sólo serán gravables por el País Miembro donde éstas se hubieren efectuado.

Se considerará, entre otros casos, que una empresa realiza actividades en el territorio de un País Miembro cuando tiene en éste:

- a) Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios;
- b) Una fábrica, planta o taller industrial o de montaje;
- c) Una obra de construcción;
- d) Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales, tales como una mina, pozo, cantera, plantación o barco pesquero;
- e) Una agencia o local de ventas;
- f) Una agencia o local de compras;
- g) Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos;
- h) Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa;
- i) Un agente o representante.

Cuando una empresa efectúe actividades en dos o más Países Miembros, cada uno de ellos podrá gravar las rentas que se generen en su territorio, aplicando para ello cada País sus disposiciones internas en cuanto a la determinación de la base gravable como si se tratara de una empresa distinta, independiente y separada, pero evitando la causación de doble tributación de acuerdo con las reglas de esta Decisión. Si las actividades se realizaran por medio de representantes o utilizando instalaciones como las indicadas en el párrafo anterior, se atribuirán a dichas personas o instalaciones los beneficios que hubieren obtenido si fueren totalmente independientes de la empresa.

Artículo 7.- Empresas Asociadas o Relacionadas

1. Cuando



- a) una empresa de un País Miembro participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de otro País Miembro, o
- b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un País Miembro y de una empresa de otro País Miembro,

y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieren de las que serían acordadas por empresas independientes, las rentas que habrían sido obtenidas por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en la renta de esa empresa y sometidas en consecuencia a imposición.

- 2. Cuando un País Miembro incluya en la renta de una empresa de ese País, y someta, en consecuencia, a imposición, la renta sobre la cual la empresa del otro País Miembro ha sido sometida a imposición en ese otro País Miembro, y la renta así incluida es renta que habría sido realizada por la empresa del País Miembro mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre las empresas independientes, ese otro País practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esa renta. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones de la presente Decisión y las autoridades competentes de los Países Miembros se consultarán en caso necesario.

Artículo 8.- Beneficios de empresas de transporte

Los beneficios que obtuvieren las empresas de transporte aéreo, terrestre, marítimo, lacustre y fluvial, sólo estarán sujetos a obligación tributaria en el País Miembro en que dichas empresas estuvieren domiciliadas.

Artículo 9.- Regalías

Las regalías sobre un bien intangible sólo serán gravables en el País Miembro donde se use o se tenga el derecho de uso del bien intangible.

Artículo 10.- Intereses

Los intereses y demás rendimientos financieros sólo serán gravables en el País Miembro en cuyo territorio se impute y registre su pago.

Artículo 11.- Dividendos y participaciones



Los dividendos y participaciones sólo serán gravables por el País Miembro donde estuviere domiciliada la empresa que los distribuye.

El País Miembro en donde está domiciliada la empresa o persona receptora o beneficiaria de los dividendos o participaciones, no podrá gravarlos en cabeza de la sociedad receptora o inversionista, ni tampoco en cabeza de quienes a su vez sean accionistas o socios de la empresa receptora o inversionista.

Artículo 12.- Ganancias de capital

Las ganancias de capital sólo podrán gravarse por el País Miembro en cuyo territorio estuvieren situados los bienes al momento de su venta, con excepción de las obtenidas por la enajenación de:

- a) Naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte, que sólo serán gravables por el País Miembro donde estuviere domiciliado el propietario, y
- b) Títulos, acciones y otros valores, que sólo serán gravables por el País Miembro en cuyo territorio se hubieren emitido.

Artículo 13.- Rentas provenientes de prestación de servicios personales

Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares, percibidos como retribuciones de servicios prestados por empleados, profesionales, técnicos o por servicios personales en general, incluidos los de consultoría, sólo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados, con excepción de sueldos, salarios, remuneraciones y compensaciones similares percibidos por:

- a) Las personas que presten servicios a un País Miembro, en ejercicio de funciones oficiales debidamente acreditadas; estas rentas sólo serán gravables por ese País, aunque los servicios se presten dentro del territorio de otro País Miembro.
- b) Las tripulaciones de naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte que realicen tráfico internacional; estas rentas sólo serán gravables por el País Miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el empleador.

Artículo 14.- Beneficios empresariales por la prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría

Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo en el País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en



contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto.

Artículo 15.- Pensiones y Anualidades

Las pensiones, anualidades y otras rentas periódicas semejantes sólo serán gravables por el País Miembro en cuyo territorio se halle situada su fuente productora.

Se considerará que la fuente está situada en el territorio del País donde se hubiere firmado el contrato que da origen a la renta periódica y cuando no existiere contrato, en el País desde el cual se efectúe el pago de tales rentas.

Artículo 16.- Rentas provenientes de actividades de entretenimiento público

Los ingresos derivados del ejercicio de actividades artísticas y de entretenimiento público, serán gravables solamente en el País Miembro en cuyo territorio se hubieren efectuado las actividades, cualquiera que fuere el tiempo que las personas que ejercen dichas actividades permanecieren en el referido territorio.

CAPITULO III IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio

El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste.

CAPITULO IV DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 18.- Tratamiento tributario aplicable a las personas domiciliadas en los otros Países Miembros

Ningún País Miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros Países Miembros, un tratamiento menos favorable que el que aplica a las personas domiciliadas en su territorio, respecto de los impuestos que son materia de la presente Decisión.

Artículo 19.- Consultas e información

Las autoridades competentes de los Países Miembros celebrarán consultas entre sí e intercambiarán la información necesaria para resolver de mutuo acuerdo cualquier dificultad o duda que se pueda originar en la aplicación de



la presente Decisión y para establecer los controles administrativos necesarios para evitar el fraude y la evasión fiscal.

La información que se intercambie en cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior será considerada secreta y no podrá transmitirse a ninguna persona distinta de las autoridades encargadas de la administración de los impuestos que son materia de la presente Decisión.

Para los efectos de este artículo, las autoridades competentes de los Países Miembros podrán comunicarse directamente entre sí, realizar auditorías simultáneas y utilizar la información obtenida para fines de control tributario.

En ningún caso las disposiciones del primer párrafo del presente artículo podrán interpretarse en el sentido de obligar a un País Miembro a:

- a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro País Miembro;
- b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro País Miembro;
- c) suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

Artículo 20.- Interpretación y Aplicación

La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros.

Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal.

Artículo 21.- Asistencia en los procesos de recaudación

Los Países Miembros se prestarán asistencia en la recaudación de impuestos adeudados por un contribuyente determinado mediante actos firmes o ejecutoriados, según la legislación del País solicitante.



El requerimiento de asistencia para ayuda solamente podrá realizarse si los bienes de propiedad del deudor tributario ubicado en el País Miembro acreedor, no fueren suficientes para cubrir el monto de la obligación tributaria adeudada.

A menos que sea convenido de otra manera por las autoridades competentes de los Países Miembros, se entenderá que:

- a) Los costos ordinarios incurridos por un País Miembro que se compromete a proporcionar su ayuda serán asumidos por ese País.
- b) Los costos extraordinarios incurridos por el País Miembro que se compromete a proporcionar su ayuda serán asumidos por el País Miembro solicitante y serán pagaderos sin consideración al monto a ser recuperado en su favor.

Este artículo será interpretado de conformidad con la legislación interna de los Países Miembros.

Artículo 22.- Vigencia

La presente Decisión entrará en vigencia respecto al impuesto sobre la renta y al impuesto sobre el patrimonio que se obtengan y a las cantidades que se paguen, acrediten, o se contabilicen como gasto, a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente a la publicación de esta Decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cuatro.



REUNION DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,
EN FORMA AMPLIADA CON LOS MINISTROS DE ECONOMIA,
HACIENDA O FINANZAS
12 de julio de 2004
Quito - Ecuador

DECISION 599

Armonización de Aspectos
Sustanciales y
Procedimentales de los
Impuestos Tipo Valor
Agregado

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA EN REUNION AMPLIADA
CON LOS MINISTROS DE ECONOMIA, HACIENDA O FINANZAS,

VISTOS: El Artículo 3, literales a), b), e); el Artículo 54, literal e); y el Artículo 58 del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La Decisión 388 y el artículo 13 de la Decisión 330; y, en uso de sus atribuciones especificadas en los literales a), b) y f) del Artículo 22 del Acuerdo de Cartagena;

CONSIDERANDO: Que en la II Reunión del Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica de los Países Miembros, realizada en octubre de 1998, se encargó a la Secretaría General de la Comunidad Andina iniciar estudios para tratar el tema de la tributación indirecta en el marco del proceso de integración andina, en particular en lo relativo al impuesto tipo valor agregado;

Que los Presidentes de los Países Miembros, en el XI Consejo Presidencial Andino, celebrado en mayo de 1999, fijaron como meta para el establecimiento del Mercado Común el año 2005;

Que el Consejo Asesor de Ministros de Hacienda o Finanzas, Bancos Centrales y Responsables de Planeación Económica en su IV Reunión, celebrada en junio de 2000, ratificó su mandato de tratar el tema de la tributación indirecta en el marco de la integración andina;

Que la armonización de políticas tributarias no sólo garantizará las condiciones de competencia entre los Países Miembros, evitando la introducción de obstáculos a las corrientes de comercio intracomunitario, pero además ofrecerá mayor seguridad jurídica y estabilidad a los regímenes tributarios nacionales;

Que el impuesto tipo valor agregado rige en todos los Países Andinos y puede considerarse como consolidado dentro de sus sistemas tributarios;



Que técnicamente es recomendable promover la neutralidad del impuesto tipo valor agregado a fin de no causar distorsiones en la economía;

Que la armonización de los impuestos tipo valor agregado debe entenderse como un proceso gradual, que deberá ser administrado por cada País Miembro dentro de los plazos definidos en esta Decisión;

Que no se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Decisión las zonas y regímenes de inmunidad fiscal, ni los beneficios o regímenes de carácter geográfico o regional contemplados en la legislación interna de cada país, los mismos que estarán regidos por las normativas nacionales y otras normas especiales;

Que las diferencias en los procedimientos gubernativos tributarios de los impuestos indirectos de los países andinos, pueden generar distorsiones en el mercado intracomunitario;

Que una regulación actual en materia procedimental, fundamentada en un análisis amparado en los estudios y propuestas de los diferentes países andinos, puede ser muy conveniente para la recaudación tributaria de cada uno de los Países Miembros;

DECIDE:

Capítulo I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

La presente Decisión regula los aspectos sustanciales y los procedimientos de los impuestos tipo valor agregado que deben armonizarse en los regímenes tributarios de los Países Miembros, a los efectos de facilitar el cumplimiento de los objetivos y compromisos de la Comunidad Andina.

Para todo lo no regulado por esta Decisión se aplicará la normativa interna de cada país.

Artículo 2.- Definiciones: Para los efectos de esta Decisión, y de las demás normas comunitarias que regulan en materia de armonización de impuestos indirectos de los Países Miembros, se entenderá por:

Causación: Es el momento en que se genera la obligación tributaria por la realización del hecho generador descrito en la norma. La realización del hecho generador para los impuestos tipo valor agregado, de que trata esta Decisión, es instantánea, así su determinación, liquidación y pago se efectúe por períodos.

Derecho al descuento o crédito fiscal: Aquel que tiene el sujeto pasivo de restar de los impuestos generados por las operaciones gravadas que realice, los impuestos



repercutidos o trasladados por la compra o importación de bienes o la utilización de servicios.

Derecho de repercusión o traslación: Aquel que tiene el sujeto pasivo de trasladar el impuesto al comprador o usuario del bien o servicio de que se trate.

Deuda tributaria exigible: Es el monto total determinado por el contribuyente o por la Administración Tributaria, que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria y que no esté en disputa.

Domiciliado o Residente: Se entenderá según las definiciones contempladas en cada legislación interna.

Exclusión: La no sujeción o liberación del impuesto establecida o permitida por ley respecto de un determinado bien o servicio, según la cual no se permite la devolución o descuento de los impuestos repercutidos.

Exportación de Bienes: La salida efectiva y definitiva de bienes al exterior desde el territorio aduanero.

Régimen de tasa cero: La liberación del impuesto establecida por ley respecto de un determinado bien o servicio, según la cual se permite la devolución o descuento de los impuestos repercutidos.

Servicios: Toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración, incluye el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y cualquier otra cesión de uso a título oneroso de marcas, patentes, derechos de autor y conexos, entre otros.

Sujeto Pasivo: Es el deudor de la obligación tributaria sustancial. Se consideran incluidos los términos “contribuyente” y “responsable o sustituto”, quedando comprendidos en este último término los agentes de percepción y retención.

Artículo 3.- Régimen de armonización andino sobre imposición indirecta al consumo.

El régimen de armonización de la imposición indirecta al consumo para los Países Miembros estará comprendido por los siguientes tributos:

1. La imposición tipo valor agregado, y
2. La imposición de tipo selectivo al consumo.



Artículo 4.- Plazos o términos.

Para los fines de la presente Decisión, los plazos o términos se contarán de la siguiente manera:

- a) **los plazos por año o meses serán continuos o calendario y terminarán el día equivalente del año o mes respectivo. El lapso que se cumpliera en un día que carezca el mes, se entenderá vencido el último día de ese mes.**
- b) **Los plazos establecidos por días se contarán por días hábiles, salvo que se disponga que sean continuos o calendario.**
- c) **En todos los casos los términos y plazos que vencieran en día inhábil, se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.**

TITULO I

**DE LOS ASPECTOS SUSTANCIALES DE LOS IMPUESTOS
TIPO VALOR AGREGADO**

**Capítulo II
Hecho generador**

**Sección I
Aspecto material del hecho generador**

Artículo 5.- Bienes y servicios sujetos a imposición.

Los impuestos tipo valor agregado se generan en la venta o transferencia de bienes, la prestación o utilización de servicios en el territorio nacional, acorde con el artículo 12 de esta Decisión, y la importación de bienes corporales muebles.

Disposición Transitoria.- Los Países Miembros que apliquen a la fecha de la entrada en vigencia de esta Decisión, una regla diferente para la imposición de servicios, podrán continuar haciéndolo hasta diez (10) años después de la entrada en vigencia de esta Decisión.

Artículo 6.- Reorganizaciones empresariales.

La imposición tipo valor agregado no se generará con motivo de la fusión, absorción, escisión o transformación de sociedades y demás formas de reorganización empresarial.

Artículo 7.- Venta o transferencia de negocios, sucesiones, cesión o transferencia de títulos valores y aportes de bienes a entidades económicas.



Los impuestos tipo valor agregado no se generarán:

- a) En la venta o transferencia total de negocios;
- b) En la transferencia de bienes por vía sucesoria;
- c) Cesión o cualquier tipo de transferencia de acciones, participaciones, o títulos valores;
- d) Aportes de bienes a sociedades en constitución por parte de personas no sujetas al impuesto; y,
- e) Aportes temporales de bienes a consorcios, “joint ventures” y demás figuras empresariales o entidades económicas similares y su reingreso a las entidades aportantes.

Disposición Transitoria.- No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los Países Miembros que a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión graven algunas de las operaciones previstas en este artículo, podrán continuar haciéndolo.

Artículo 8.- Responsabilidad por el IVA en prestación de servicios por parte de no residentes ni domiciliados.

En el caso de servicios gravados, prestados por no residentes ni domiciliados en el país donde se utilice el servicio, el usuario o destinatario del servicio tendrá la condición de sujeto pasivo.

Artículo 9.- Retiro de bienes.

Con motivo del retiro de bienes por parte del sujeto pasivo del IVA, para un fin distinto a la actividad gravada, se generará el impuesto sobre una base gravable constituida por el valor comercial del bien. El retiro de bienes no utilizables o no susceptibles de comercialización por cualquier causa justificada según la legislación interna de cada país, no estará gravado.

Artículo 10.- Servicios de construcción y venta de bienes inmuebles.

Los ordenamientos jurídicos de cada País Miembro deberán implementar los mecanismos adecuados para la determinación de la base imponible que corresponda a la prestación o utilización de servicios de la construcción.

Podrá gravarse con el impuesto tipo valor agregado sólo la primera venta de los bienes inmuebles.

Disposición Transitoria.- No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los Países Miembros que a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión gravaran la segunda y posteriores ventas de inmuebles, podrán continuar haciéndolo.



Sección II

Aspecto personal del hecho generador

Artículo 11.- Conjuntos Económicos.

Para los efectos de esta Decisión, los conjuntos económicos que aquí se enuncian, entre otros serán sujetos pasivos del impuesto en el evento de realizar operaciones gravadas por el mismo:

1. Las comunidades de bienes.
2. Los consorcios o uniones temporales.
3. Los convenios de asociación, “joint ventures” y demás convenios de colaboración empresarial.
4. Las sociedades de hecho.
5. Las sucesiones ilíquidas o indivisas.
6. Los patrimonios autónomos en virtud de contratos de fiducia.
7. Los fondos de cualquier índole.

Sección III

Aspecto territorial del hecho generador

Artículo 12.- Reglas para la territorialidad de los servicios.

Para los efectos de los impuestos tipo valor agregado que regula la presente Decisión, los servicios cuya prestación o ejecución trascienda las fronteras nacionales y que se mencionan a continuación, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Se entenderán prestados o utilizados en el lugar donde se realicen materialmente, los siguientes servicios:
 - a) Carga y descarga, trasbordo, cabotaje y almacenamiento de bienes;
 - b) Los de carácter artístico, deportivo y cultural.
2. Los servicios que se presten desde el exterior y se utilicen o aprovechen por residentes o domiciliados en un País Miembro, se considerarán prestados en la jurisdicción de este país; tales como los que se mencionan a continuación:
 - a) Las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a cualquier título, de bienes incorpóreos o intangibles;
 - b) Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría;
 - c) Los arrendamientos de bienes corporales muebles que se utilicen en el territorio del País Miembro;



- d) Los servicios de traducción, corrección o composición de texto;
 - e) Los servicios de seguros relacionados con bienes ubicados en el territorio del País Miembro;
 - f) Los realizados sobre bienes corporales muebles que permanecen u operan en el territorio del País Miembro;
 - g) Los servicios de conexión o acceso satelital, cualquiera que sea la ubicación del satélite;
 - h) El servicio de televisión satelital o cable recibido en el País Miembro;
 - i) Los servicios de telecomunicaciones.
3. Los servicios realizados sobre bienes inmuebles, se entenderán prestados en el lugar de ubicación de los mismos.

Artículo 13.- Exportación de servicios.

Además de los requisitos establecidos en la legislación interna de cada País Miembro, para considerar una operación como exportación de servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- a) que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país exportador;
- b) que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea residente en el país exportador;
- c) que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del servicio se realice en el país exportador;
- d) que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado como costo o gasto en el país exportador por parte de empresas o personas que desarrollen actividades o negocios en el mismo.

Para los efectos de los impuestos tipo valor agregado que regula la presente Decisión, la exportación de servicios estará sujeta al Régimen de Tasa Cero.

Disposición Transitoria.- No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los Países Miembros que a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión gravaren las exportaciones de servicios o los sometieren a un régimen distinto al de tasa cero, podrán continuar haciéndolo hasta seis (6) años después de la entrada en vigencia de esta Decisión.

Artículo 14.- Servicio de transporte.

Para el servicio de transporte se aplicarán las siguientes reglas:



1. El servicio de transporte internacional de carga, incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, estará sujeto al régimen de tasa cero.
2. En el servicio de transporte internacional de pasajeros, el impuesto se causará solo en el país del embarque inicial y a su favor, según la tasa y demás reglas que en el mismo se encuentren vigentes en el momento del embarque.
3. El transporte nacional de carga y el aéreo de pasajeros estará gravado con el impuesto tipo valor agregado.
4. Las otras modalidades de transporte nacional de pasajeros se sujetarán a las normas internas de cada País Miembro.

Disposición Transitoria.- En el servicio de transporte internacional de carga, incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, los Países Miembros que a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión dispongan de reglas distintas, podrán continuar aplicándolas. Cualquier reforma que se haga sobre el tratamiento de este servicio será para otorgar régimen de tasa cero.

No obstante aquellos Países Miembros que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión mantengan los servicios de transporte internacional de carga excluidos del ámbito del impuesto, podrán gravar estos servicios con un régimen distinto al de tasa cero. Posteriores reformas serán para otorgar régimen de tasa cero.

Los Países Miembros que a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, tengan reglas distintas para los casos previstos en los numerales 2 y 3, podrán seguir aplicándolas hasta diez (10) años después de la entrada en vigencia de esta Decisión.

Sección IV

Aspecto temporal del hecho generador

Artículo 15.- Causación del impuesto.

Los impuestos tipo valor agregado se generarán en forma instantánea, y se causarán en los siguientes momentos:

1. En la venta o transferencia de bienes y prestación de servicios, excepto en el caso de los servicios públicos, con la entrega total del bien o terminación del servicio. No obstante, los Países Miembros podrán disponer que el impuesto se cause en el momento de la emisión del comprobante respectivo por el monto total o en el momento del pago total del bien o del servicio, lo que ocurra primero. En los casos de entrega parcial, pago parcial o emisión de comprobantes por montos parciales, las legislaciones de cada país regularán el nacimiento de la obligación tributaria.



2. En los contratos de tracto sucesivo, a medida que se haga exigible cada canon o cuota y en proporción al mismo. No obstante, los Países Miembros podrán disponer que el impuesto se cause en el momento de la emisión del comprobante respectivo o en el momento del pago del bien o del servicio, lo que ocurra primero.
3. En el caso de los servicios públicos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación interna de cada País Miembro.
4. En la importación, con la nacionalización de bienes.
5. En la utilización en el País Miembro de servicios prestados por no domiciliados o no residentes, al momento de la prestación del servicio, en la fecha de registro del respectivo comprobante por parte del receptor del servicio o en la fecha en que se pague la contraprestación, lo que ocurra primero.

Artículo 16.- Modificaciones al ordenamiento vigente.

Las modificaciones normativas que impliquen alteración en el importe tributario por pagar, sólo podrán empezar a aplicarse a partir del período fiscal siguiente, a la fecha de promulgación de la norma fiscal correspondiente.

Disposición Transitoria.- Los Países Miembros que mantengan a la fecha de la entrada en vigencia de esta Decisión normas que contemplen otras modalidades para su puesta en vigencia que la prevista en este artículo, podrán continuar aplicándolas.

Capítulo III Base gravable

Artículo 17.- Base gravable.

La base gravable en los impuestos tipo valor agregado incluye tanto la erogación principal como las accesorias o complementarias, aunque estas últimas se facturen o convengan por separado y aunque, consideradas independientemente, no estén sometidas al impuesto. En ese entendido, integran la base gravable, entre otros, los gastos de acarreo, transporte, instalación, montaje, seguros, gastos de financiación y moratorios al igual que comisiones, sea que se pacten, convengan o generen como accesorios o complementarios de la operación principal.

Las modificaciones al valor de la operación y los descuentos que se acuerden con posterioridad a la misma, según las prácticas usuales del comercio, darán lugar al ajuste correspondiente a la base gravable, en la fecha en que se realicen.

La base gravable en las importaciones estará constituida por el valor en aduana de la mercancía, adicionado con los derechos e impuestos aduaneros que deban pagarse y toda otra erogación que tenga que efectuar el importador para el despacho aduanero que figure en la declaración de importación o documento equivalente.



En todo lo no previsto en este artículo para la determinación de la base gravable, los Países Miembros aplicarán su legislación interna.

Disposición Transitoria.- Los Países Miembros que no contemplen los ajustes a la base gravable por descuentos efectuados con posterioridad a la operación comercial que los origina, no estarán obligados a observar lo estipulado en el párrafo segundo de este artículo.

Artículo 18.- Base gravable en la permuta.

Los impuestos tipo valor agregado se generarán para cada una de las partes en la permuta. La base gravable corresponderá al valor asignado a cada uno de los bienes permutados, valor que, en todo caso, no podrá ser inferior al valor comercial. Igual regla se aplicará para el caso de servicios.

Capítulo IV Tasas

Artículo 19.- Tasas.

Los impuestos tipo valor agregado tendrán una tasa general, la cual no podrá ser superior al 19% con inclusión de toda sobretasa o recargo distinto de los impuestos selectivos al consumo.

Los Países Miembros podrán fijar una sola tasa preferencial que no deberá ser inferior al 30% de la tasa general, para gravar los bienes y servicios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión se encuentren excluidos.

Disposición Transitoria.- Los Países Miembros tendrán un plazo de diez (10) años contados a partir de la entrada en vigencia de esta Decisión, para adecuar su legislación a lo dispuesto en este artículo.

Capítulo V Exclusiones y Régimen de Tasa Cero

Artículo 20.- Régimen de tasa cero del impuesto.

El Régimen de tasa cero sólo se aplicará para las exportaciones de bienes y servicios.

Disposición Transitoria.- Los Países Miembros deberán ajustar sus legislaciones en este sentido dentro de los cinco (5) años contados a partir de la vigencia de esta Decisión.

Artículo 21.- Nomenclatura para la exclusión de bienes.



Para la exclusión de bienes se utilizará la nomenclatura arancelaria andina, a 8 dígitos como mínimo, la cual podrá ser acotada de ser necesario.

Disposición Transitoria.- Los Países Miembros deberán ajustar su legislación interna a esta metodología en el plazo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de esta Decisión.

Artículo 22.- Principio de imposición de bienes

En todos los países andinos regirá el principio de “imposición en el país de destino”. Por consiguiente:

- a) Toda importación de bienes está gravada con el impuesto, a menos que se trate de bienes excluidos.
- b) Los bienes que se exporten estarán sujetos al régimen de tasa cero.

Artículo 23.- Exclusión de bienes.

Los Países Miembros, a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, no podrán crear nuevas exclusiones de bienes, ni ampliar las existentes en su legislación interna.

A partir del comienzo del undécimo (11º) año de la entrada en vigencia de esta Decisión, sólo podrán mantener las siguientes exclusiones:

- a) Los bienes importados por las misiones diplomáticas, consulares y por sus funcionarios diplomáticos debidamente acreditados, con sujeción a los convenios internacionales y a las reglas sobre reciprocidad.
- b) Los bienes importados por organismos internacionales y su personal con rango de funcionario internacional debidamente acreditados, que hayan suscrito convenios de inmunidades y privilegios.
- c) Las importaciones de bienes donados provenientes del exterior destinadas al sector público y organizaciones privadas sin ánimo de lucro con fines de salud, educación y utilidad común; debidamente verificadas y autorizadas por la autoridad competente en cada país.
- d) Equipaje acompañado y no acompañado, de acuerdo a lo tipificado en la legislación nacional.

Por consiguiente, los Países Miembros deberán eliminar gradualmente todas las exclusiones de bienes que no estén contempladas en los literales anteriores.

Artículo 24.- Principio de Imposición de Servicios.

En todos los países andinos regirá el principio de “imposición en el país de destino”, salvo lo dispuesto en el artículo 13. Por consiguiente:



- a) habrá lugar al impuesto, en relación con los servicios a que se refiere el numeral 2° del artículo 12 de esta Decisión.
- b) estarán sujetos al régimen de tasa cero los servicios exportados a que se refiere el artículo 13 de esta Decisión.

Artículo 25.- Exclusión de servicios.

Los Países Miembros, a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, no podrán crear nuevas exclusiones de servicios, ni ampliar las existentes en su legislación interna, salvo en los servicios señalados en el siguiente párrafo.

A partir del comienzo del undécimo (11°) año de la entrada en vigencia de esta Decisión, sólo podrán tener las siguientes exclusiones:

- a) Los servicios de educación, salud y de transporte nacional de pasajeros, excepto el aéreo, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación de cada País Miembro; y,
- b) Servicios de intermediación financiera.

Por consiguiente los Países Miembros deberán eliminar gradualmente todas las exclusiones de servicios que no estén contempladas en los literales anteriores.

Los Países Miembros establecerán en sus legislaciones el tratamiento tributario que otorguen a los servicios administrativos prestados con la calidad de licencias, registros, matrículas y similares, por parte de instituciones estatales en cumplimiento de sus fines y funciones, por los cuales éstas perciban tasas, derechos, arbitrios u otra forma similar de contraprestación. Dicho tratamiento podrá considerar a los referidos servicios como excluidos o como operaciones que no generen impuesto tipo valor agregado.

Capítulo VI
Determinación del impuesto

Artículo 26.- Determinación del impuesto por pagar.

El impuesto por pagar en cada período de referencia:

- a) En el caso de venta o transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios, estará constituido por la diferencia entre los impuestos causados en el período y los impuestos repercutidos que otorguen derecho a descuento tributario o crédito fiscal.
- b) En la importación se determinará aplicando en cada operación la tasa del impuesto sobre la base gravable correspondiente.



Artículo 27.- Derecho a crédito fiscal.

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes y servicios que reúnan los requisitos formales que determine cada legislación nacional y los siguientes requisitos sustanciales:

- a) Que sean necesarios para desarrollar el giro del negocio del sujeto pasivo de acuerdo con las limitaciones o restricciones que cada legislación nacional establezca.
- b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el impuesto tipo valor agregado o a las operaciones sujetas al régimen de tasa cero.

Artículo 28.- Crédito Fiscal de activos fijos o bienes de capital.

Tratándose de compra o adquisición de activos fijos o bienes de capital, los impuestos repercutidos otorgan derecho a crédito fiscal para el sujeto pasivo en las mismas condiciones a que se refiere el artículo anterior aplicando cualquiera de las siguientes opciones, conforme estén previstas en la legislación de los Países Miembros:

- a) El descuento en el período en el cual se verifique la adquisición del activo, o en general, en el que se pueden compensar los créditos fiscales de impuestos repercutidos.
- b) La devolución de los impuestos repercutidos, la cual podrá efectuarse aunque no haya iniciado operaciones, o esté en proceso de instalación, montaje o puesta en marcha.
- c) El crédito fiscal por el sistema de “prorrata temporis”, conforme al cual el impuesto repercutido se amortizará a lo largo de la vida útil del activo en función de su utilización por parte del sujeto pasivo. De adoptarse esta modalidad de descuento, el saldo por amortizar se ajustará todos los meses por inflación.

Si el sujeto pasivo, en los casos a) y b), enajenare el activo en cuestión por un precio menor al de adquisición, los Países Miembros le podrán exigir el reintegro de la porción de crédito fiscal generado, según lo establecido en sus legislaciones.

Disposición Transitoria.- Los Países Miembros que a la fecha de la entrada en vigencia de esta Decisión no otorguen derecho a crédito fiscal por la compra o adquisición de activos fijos o bienes de capital, podrán continuar con esta práctica hasta seis (6) años después de la entrada en vigencia de esta Decisión.

Artículo 29.- Proporcionalidad de los impuestos descontables.



El crédito fiscal originado en la adquisición de bienes o utilización de servicios destinados en su totalidad a operaciones gravadas a la tasa general y a operaciones sujetas a régimen de tasa cero, será descontable en un ciento por ciento (100%).

Los Países Miembros que apliquen tasas preferenciales podrán regular la recuperación del crédito fiscal según su legislación interna.

Cuando se destinen indistintamente a operaciones gravadas a la tasa general y a operaciones sujetas a régimen de tasa cero o excluidas del impuesto, y no fuere posible su imputación directa a una y otras, el descuento se hará en función del componente del crédito fiscal que proporcionalmente corresponda a las operaciones gravadas a la tasa general y a las operaciones sujetas a régimen de tasa cero o excluidas, según la legislación de cada País Miembro.

Capítulo VII Excepciones

Artículo 30.- Excepciones.

No obstante lo establecido en los artículos 19, 23, 25 y 27 de la presente Decisión un País Miembro podrá adoptar las medidas correctivas necesarias para hacer frente a la existencia o amenaza de una severa crisis fiscal a nivel de Gobierno Central o atender situaciones de emergencia nacional, previa autorización de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Cuando la situación contemplada en el párrafo anterior exigiere providencias inmediatas, el País Miembro podrá aplicar las medidas correctivas que considere necesarias y las comunicará en un plazo no mayor de cinco días, contado desde la fecha de adopción de las medidas, a la Secretaría General de la Comunidad Andina, la que se pronunciará dentro de los treinta días siguientes, para autorizarlas, modificarlas o suspenderlas.

Las medidas correctivas que se apliquen de conformidad con los párrafos anteriores:

1. Serán de carácter transitorio y se eliminarán progresivamente a medida que mejore la situación que las motivó;
2. No podrán discriminar entre los Países Miembros de la Comunidad Andina;
3. No se optarán ni mantendrán con el fin de proteger a un determinado sector.

TITULO II

DE LOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE LOS IMPUESTOS TIPO VALOR AGREGADO

Capítulo VIII Declaración del impuesto



Artículo 31.- Declaración del impuesto.

Los impuestos tipo valor agregado serán liquidados por el sujeto pasivo en los formatos de declaración que, para el efecto, disponga la Administración Tributaria de cada País Miembro.

El período fiscal del impuesto no podrá ser superior a dos (2) meses. La declaración y pago será efectuada según lo disponga la respectiva legislación sin que exceda del mes calendario siguiente al del período fiscal.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores cada País Miembro podrá fijar plazos distintos para la declaración y pago de operaciones excluidas o especiales.

En las operaciones de importación de bienes, los impuestos tipo valor agregado se declararán y pagarán conforme lo regule la normativa interna de cada País Miembro.

Capítulo IX

Devolución y compensación de saldos a favor

Artículo 32.- Derecho a la devolución para las exportaciones.

Sin perjuicio del régimen aplicable a los activos fijos y bienes de capital, los sujetos pasivos del impuesto que, por efecto de la aplicación del régimen de tasa cero, liquiden saldos a favor por exportación en sus declaraciones tributarias, tendrán derecho a recuperar dicho saldo de acuerdo a las legislaciones internas de cada País Miembro.

La legislación de cada País Miembro podrá establecer la proporción respecto al valor de las exportaciones que será susceptible de devolución.

Se entenderá satisfecho el derecho a las devoluciones de los impuestos tipo valor agregado, en los casos en los que por la modalidad de contrataciones con el Estado, se haya previsto otra forma de compensación alternativa en los contratos de explotación de recursos naturales no renovables, pagado en sus adquisiciones de bienes y servicios por la empresa contratante, cuando el País Miembro así lo prevea.

Disposición Transitoria.- Los Países Miembros que a la fecha de la entrada en vigencia de esta Decisión no devuelvan el impuesto por las operaciones de servicios utilizadas para la exportación de bienes, podrán mantener esta regla hasta seis (6) años después de la entrada en vigencia de esta Decisión.

Artículo 33.- Intereses a cargo del fisco.



Cuando no exista en la legislación interna un plazo para la devolución de los impuestos tipo valor agregado a los exportadores, transcurridos dos (2) meses a partir de la determinación del monto a devolver efectuada por la Administración Tributaria, el sujeto pasivo percibirá intereses a la tasa prevista en la legislación interna.

Disposición Transitoria.- No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los Países Miembros que a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión no reconozcan intereses moratorios por demoras en la devolución de los saldos a favor podrán continuar con esta práctica hasta cinco (5) años después de la entrada en vigencia de esta Decisión.

Artículo 34.- Inadmisión de solicitudes de devolución.

Los regímenes de cada País Miembro deberán establecer, con precisión, las causales de inadmisión de las solicitudes por causas formales. Cuando haya lugar a la inadmisión de una solicitud, la Administración Tributaria señalará los motivos de la misma indicando, de manera precisa, la forma, condiciones y plazos para subsanarlos.

Artículo 35.- Negativa o rechazo de la devolución.

Las autoridades tributarias de los Países Miembros negarán la devolución cuando no se verifique el derecho a la misma, especialmente por no configurarse la operación de exportación respectiva.

También se negará la devolución, entre otras causales, por:

- a) la presentación extemporánea, conforme la legislación interna de cada País Miembro.
- b) cuando los montos solicitados ya hayan sido objeto de devolución o compensación anterior, sin perjuicio de las sanciones legales que correspondan.

Artículo 36.- Compensación del saldo a favor.

Los saldos a favor del sujeto pasivo de los impuestos tipo valor agregado con derecho a devolución, podrán ser compensados por la Administración Tributaria contra las deudas tributarias exigibles administradas por la misma institución y correspondientes al mismo acreedor tributario.

Capítulo X Facturación

Artículo 37.- Requisitos mínimos de las facturas.

Para que proceda el descuento del crédito fiscal correspondiente a las operaciones de compra de bienes o uso de servicios en el mercado interno, éstas



deberán constar en facturas que cumplan con los requisitos exigidos por cada País Miembro, los cuales deberán incluir, al menos, los siguientes:

1. Nombre completo o razón social y número del registro tributario o de identificación fiscal del sujeto pasivo que realiza la operación sujeta al impuesto.
2. Nombre completo o razón social e identificación fiscal del adquirente del bien o servicio.
3. Discriminación del impuesto causado.
4. Número consecutivo de facturación.
5. Fecha de expedición.
6. Descripción de los bienes o servicios adquiridos.
7. Valor total de la operación.

Los Países Miembros deberán implementar los sistemas de control de impresión, emisión y uso de facturas que consideren adecuados.

Los Países Miembros podrán establecer excepciones a la obligación de facturar y los requisitos señalados, así como autorizar la emisión de documentos equivalentes a la misma o crear mecanismos de control alternativos.

No obstante lo previsto en el numeral tercero, los Países Miembros podrán omitir este requisito si mantienen un sistema que permita conocer el valor del impuesto causado en cada factura.

Capítulo XI

Retención en la fuente

Artículo 38.- Retenciones en la fuente.

Los Países Miembros podrán establecer sistemas de retención de los impuestos tipo valor agregado que contemplen, entre otros, los siguientes casos:

1. Venta de bienes o prestación de servicios al gobierno nacional y demás entidades del sector público; a los contribuyentes calificados como “grandes” o “especiales”; o, a los que la Administración Tributaria señale como agentes de retención.
2. Pagos o abonos en cuenta por parte de entidades administradoras de tarjetas de débito o crédito a los establecimientos afiliados, por las transacciones que éstos hayan realizado.

Capítulo XII

Regímenes simplificados

Artículo 39.- Regímenes de pequeños agentes económicos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los Países Miembros podrán crear regímenes especiales que comprendan a los impuestos tipo valor



agregado para pequeños agentes económicos, simplificando las obligaciones fiscales a cargo de las mismas, con los límites y condiciones que los Países Miembros establezcan.

Capítulo XIII Vigencia

Artículo 40.- Vigencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, la presente Decisión será incorporada al derecho interno de cada País Miembro cuando así lo prevea su norma constitucional y entrará en vigencia el primer día calendario del mes inmediato siguiente a la fecha del último depósito del instrumento correspondiente en la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Disposición Transitoria.- Mecanismo de Seguimiento.

Los Países Miembros establecerán en el plazo de 90 días a partir de la vigencia de la presente Decisión, un mecanismo de seguimiento para verificar cada dos (2) años, los avances graduales que registren con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23 y 25.

Dada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los doce días del mes de julio del año dos mil cuatro.



REUNION DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,
EN FORMA AMPLIADA CON LOS MINISTROS DE ECONOMIA,
HACIENDA O FINANZAS

12 de julio de 2004

Quito - Ecuador

DECISION 600

Armonización de los
Impuestos Tipo Selectivo al
Consumo

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA EN REUNION AMPLIADA
CON LOS MINISTROS DE ECONOMIA, HACIENDA O FINANZAS,

VISTOS: El Artículo 3, literales a), b), e); el Artículo 54, literal e); y el Artículo 58 del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La Decisión 388 y el artículo 13 de la Decisión 330; y, en uso de sus atribuciones especificadas en los literales a), b) y f) del Artículo 22 del Acuerdo de Cartagena;

CONSIDERANDO: Que en todos los Países Miembros existen impuestos tipo selectivo al consumo que, como tales, procuran incidir sobre las decisiones de consumo para regularlos de acuerdo con los ideales y el buen curso de la sociedad y sólo en segundo lugar generar recaudos para el Estado;

Que en otros casos, en lugar de impuestos adicionales al IVA sobre los consumos suntuarios o semisuntuarios, rigen tarifas diferenciales más elevadas;

Que los objetivos comunitarios de mercado interior y neutralidad en la circulación y consumo de bienes y servicios aconsejan un sistema de tributación indirecta sobre el consumo que siga los mismos lineamientos básicos y, en lo posible, no registre diferencias estructurales en las normativas de los Países Miembros para que los agentes económicos puedan tener un ámbito de claridad y competencia libre y comparable;

Que pese a que los impuestos tipo selectivo al consumo presentan algunas características diferentes en los distintos ordenamientos jurídicos de los Países Miembros, éstos podrían ser sustituidos por un ordenamiento general más armónico. No obstante, se reconoce que los Países Miembros pueden tener otros bienes y servicios gravados con impuestos tipo selectivo al consumo que no son objeto de esta Decisión y por tanto no son regulados por ésta;



Que, en general, las normativas nacionales de los Países Miembros sobre los impuestos tipo selectivo al consumo son afines con las de los restantes países, y que las diferencias si bien pueden ocasionar distorsiones en el mercado no son extremas;

Que las diversas tarifas diferenciales que existan en los impuestos tipo valor agregado en algunos Países Miembros pueden ser sustituidas por impuestos tipo selectivo al consumo;

Que, en consecuencia, se pueden establecer las bases para un sistema de imposición indirecta que sea comparable y claro, en su concepto y en sus alcances, en los Países Miembros;

Que las modalidades de los impuestos tipo selectivo al consumo pueden consistir en: “Impuestos ad valorem” sobre el precio final, o “Impuestos específicos” aplicando montos fijos de dinero por unidad física del producto, que sean materia de indexación periódica con fundamento en el índice de inflación;

Que no se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Decisión las zonas y regímenes de inmunidad fiscal, ni los beneficios o regímenes de carácter geográfico o regional contemplados en la legislación interna de cada país, los cuales estarán regidos por las normativas nacionales y otras normas especiales;

DECIDE:

Capítulo I

Ámbito de aplicación de la Decisión

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

La presente Decisión armoniza los aspectos sustanciales y procedimentales de los “impuestos tipo selectivo al consumo” (ISC) de los regímenes tributarios de los Países Miembros, a efectos de impulsar la política de integración subregional andina.

Por consiguiente, los Países Miembros adecuarán sus regímenes tributarios a lo dispuesto en esta Decisión en los plazos previstos en la misma, cualquiera sea el ámbito de aplicación territorial de tales impuestos.

La creación o modificación de este tipo de impuestos que efectúen los Países Miembros deberá adecuarse a la presente Decisión y notificarse a la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 2.- Naturaleza del impuesto.

Los “impuestos tipo selectivo al consumo” (ISC) gravan la importación y el consumo en el mercado interno de determinados bienes y servicios, sea de forma individual o con carácter adicional o complementario a los impuestos tipo valor agregado. Son tributos de tipo monofásico.



Capítulo II

Normas generales

Artículo 3.- Norma general.

A los “impuestos tipo selectivo al consumo” (ISC) les son aplicables todas las normas generales que regulan los impuestos tipo valor agregado (IVA) que sean compatibles con su naturaleza y, en especial, los siguientes:

- a) El momento de causación, sin perjuicio del régimen monofásico a que se refiere la presente Decisión.
- b) Los principios relativos a la territorialidad.
- c) Los aspectos generales que regulan la materia imponible en relación con la venta de los bienes y los servicios gravados con el impuesto, y
- d) Las definiciones de los sujetos pasivos en relación con las operaciones gravadas.

Capítulo III

Hecho generador

Artículo 4.- Generación del Impuesto.

Los ISC se generan con motivo de la importación efectuada o de la primera venta o transferencia que realice el productor. Los ISC sobre servicios se generarán por razón de su prestación.

Serán regulados por la legislación interna de cada País Miembro:

- a) La generación de impuestos tipo selectivo al consumo en aquellos casos en los que se presume la realización de una venta o transferencia de bienes.
- b) La generación de impuestos tipo selectivo al consumo, cuando exista vinculación económica entre comprador y vendedor aún cuando abarque fases posteriores de comercialización.
- c) La aplicación de impuestos tipo selectivo al consumo a otros bienes y servicios gravados, no previstos en la presente Decisión.
- d) Los casos en los que se establezcan exclusiones para determinados bienes y servicios, o en su defecto el derecho a crédito tributario o a devolución.

Artículo 5.- Retiro de bienes.

Con motivo del retiro de bienes por parte del sujeto pasivo de los ISC, para un fin distinto a la actividad gravada, se generará el impuesto sobre una base gravable



constituida por el valor comercial del bien. El retiro de bienes no utilizables o no susceptibles de comercialización por cualquier causa justificada según la legislación interna de cada país, no estará gravado.

Capítulo IV

Sujetos Pasivos

Artículo 6.- Sujetos pasivos de los impuestos tipo selectivo al consumo.

Sin perjuicio de las reglas establecidas en las legislaciones de cada País Miembro relativas a solidaridad, vinculación económica, distorsiones del mercado o condiciones especiales en la producción y comercialización, son sujetos pasivos de los ISC los siguientes:

- a) Los productores de bienes gravados.
- b) Los importadores de bienes gravados.
- c) Los prestadores de servicios gravados.
- d) Los usuarios o destinatarios del servicio, en el caso de servicios prestados por no residentes ni domiciliados en país destinatario.

Capítulo V

Base gravable

Artículo 7.- Base o magnitud gravable.

La base gravable de los impuestos tipo selectivo al consumo estará definida en la legislación interna de los Países Miembros, asegurando que no se produzca un tratamiento discriminatorio entre productos nacionales e importados. Tratándose de tarifas ad valorem no se incorporará en ellas los impuestos tipo valor agregado ni los impuestos tipo selectivo al consumo.

Capítulo VI

Carga tributaria

Artículo 8.- Carga tributaria

Las cargas tributarias totales, considerando los impuestos tipo valor agregado y los impuestos tipo selectivo al consumo, que se tributan en el ámbito nacional o regional, serán objeto de un trabajo de armonización para fijar mínimos en la Comunidad Andina, tres (3) años después de la entrada en vigencia de esta Decisión.

El trabajo de armonización se enfocará a los productos derivados de tabaco, cerveza y bebidas alcohólicas en una primera fase.

Capítulo VII



Determinación del impuesto

Artículo 9.- Determinación del impuesto.

Los ISC se determinarán por aplicación directa de la tasa o monto fijo señalado para el bien o servicio gravado de que se trate, a la base gravable o a la magnitud o unidad física de referencia, de acuerdo a lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros.

Capítulo VIII

Declaración del impuesto

Artículo 10.- Declaración del impuesto.

Los ISC se autoliquidarán por el sujeto pasivo en los formatos de declaración que, para el efecto, disponga la Administración Tributaria de cada País Miembro.

Los períodos de declaración y pago serán efectuados según lo disponga la respectiva legislación sin que exceda del mes calendario siguiente al del período fiscal.

En las operaciones de importación de bienes, los ISC se declararán y pagarán conforme lo regule la normativa interna de cada País Miembro.

La legislación interna de cada País Miembro podrá establecer sistemas especiales de pagos a cuenta de los ISC.

Artículo 11.- Facturación.

Los sujetos pasivos, en cada operación que realicen por los bienes o servicios gravados con los impuestos tipo selectivo al consumo, emitirán una sola factura en la que discriminarán el IVA y los ISC. Tales facturas cumplirán con lo señalado en el artículo 37 de la Decisión 599: Armonización de Aspectos Sustanciales y Procedimentales de los Impuestos Tipo Valor Agregado.

Capítulo IX

Vigencia

Artículo 12.- Vigencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, la presente Decisión será incorporada al derecho interno de cada País Miembro cuando así lo prevea su norma constitucional y entrará en vigencia el primer día calendario del mes inmediato siguiente a la fecha del último depósito del instrumento correspondiente en la Secretaría General de la Comunidad Andina.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los doce días del mes de julio del año dos mil cuatro.



PERIODO NOVENTA Y TRES DE SESIONES
ORDINARIAS DE LA COMISIÓN
19 de julio de 2006
Lima - Perú

DECISIÓN 635

Modificación de las
Decisiones 599 y 600
relativas a la Armonización
de Aspectos Sustanciales y
Procedimentales de los
Impuestos Tipo Valor
Agregado y Armonización de
los Impuestos Tipo Selectivo
al Consumo

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los artículos 3, literal b); 54, literal e); y 57 del Acuerdo de Cartagena; y las Decisiones 599, relativa a la Armonización de Aspectos Sustanciales y Procedimentales de los Impuestos Tipo Valor Agregado, y 600 sobre Armonización de los Impuestos Tipo Selectivo al Consumo;

CONSIDERANDO: Que el 12 de julio de 2004 la Comisión de la Comunidad Andina, en Reunión Ampliada con los Ministros de Economía, Hacienda o Finanzas, emitió las Decisiones 599 sobre Armonización de Aspectos Sustanciales y Procedimentales de los Impuestos Tipo Valor Agregado y 600 sobre Armonización de los Impuestos Tipo Selectivo al Consumo, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Número 1093 de 16 de julio de 2004;

Que, las Decisiones 599 y 600 tienen por finalidad armonizar algunos aspectos en materia de impuestos tipo valor agregado y tipo selectivo al consumo. Para alcanzar dicho objetivo es necesario que los Países Miembros dispongan de plazos razonables para adoptar las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para la aplicación de las normas contenidas en las referidas Decisiones;

Que, a tiempo de ratificar el contenido de las Decisiones 599 y 600, la Comisión de la Comunidad Andina considera necesario precisar su fecha de entrada en vigencia;

Que la Secretaría General presentó a consideración de la Comisión la Propuesta 157;

DRA. KARINA RAQUEL ARMIJOS RUILOVA



DECIDE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto los artículos 40 de la Decisión 599 y 12 de la Decisión 600.

Artículo 2.- Las Decisiones 599 y 600 entrarán en vigencia el 1 de enero del año 2008.

A solicitud de un País Miembro, la Comisión de la Comunidad Andina prorrogará, hasta por tres años, la entrada en vigencia de las Decisiones 599 y 600.

La solicitud de prórroga deberá ser presentada con al menos tres meses de anticipación a la fecha prevista en el primer párrafo y expondrá el grado de avance en la adopción de las medidas a que se refiere el artículo 3 de la presente Decisión así como las circunstancias que motivan la solicitud.

Artículo 3.- Los Países Miembros informarán a la Secretaría General acerca de las medidas legislativas, reglamentarias o administrativas que adopten con la finalidad de asegurar la debida aplicación de las normas contenidas en las Decisiones 599 y 600.

Artículo 4.- La Secretaría General mantendrá informada a la Comisión de la Comunidad Andina sobre las medidas adoptadas por los Países Miembros en cumplimiento de las Decisiones 599 y 600.

Artículo 5.- La presente Decisión entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis.



Algunos procesos de incumplimiento por parte de los países miembros de la CAN

EXPEDIENTE	PAIS	ASUNTO	AÑO
-------------------	-------------	---------------	------------

- 1.- [SG-IN-223](#) Perú 04-AI-2006 Aplicación de sobretasas calificadas como gravámenes a las importaciones originarias de la Subregión de la cadena de oleaginosas, año 2008.
- 2.- [SG-IN-224](#) Colombia República de Colombia - Reclamo por presunto incumplimiento de las Decisiones 439 y 462 por la expedición y forma de aplicación de la Resolución 087, año 2007.
3. - [SG-IN-222](#) Colombia República de Colombia - Procedimiento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento iniciado por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ETB S..., año 2007.
- 4.- [SG-IN-219](#) Ecuador República del Ecuador – Reclamo de la empresa Medicamenta Ecuatoriana S.A. por incumplimiento de disposiciones contenidas en la Decisión 486, que esta..., año 2006
- 5.- [SG-IN-197](#) Ecuador Mediante resolución emitida por el 14º Juzgado en lo Civil de Pichincha, se suspenden los efectos de la publicación del tarifario de SOPROFON, impidié..., año 2005.
- 6.- [SG-IN-196](#) Ecuador Modificación unilateral del arancel, a nivel 0% para productos fluorescentes de cátodo caliente, año 2005
- 7.- [SG-IN-153](#) Bolivia Exigencia de fumigación con bromuro de metilo al algodón originario de Perú, año 2001.
- 8.- [SG-IN-138](#) Bolivia Incumplimiento del Arancel Externo Común y de la Decisión 414 , año 2000.